

Honorable Juez
Doctora GLORIA MILENA ROJAS PAREDES.
JUZGADO QUINTO (5º) ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
E. S. D.
Popayán Cauca

Ref.: CONTESTACIÓN DEMANDA
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Proceso No.: 190013333005 2023 00133 00
Actor: NANCY ELENA BASTIDAS - OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRO

ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS, mayor, domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao, Cauca, con Tarjeta Profesional número 140.187 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Nit. 800.152.783-2**, en adelante FGN, de conformidad con el poder que adjunto con sus respectivos anexos, con todo respeto y oportunamente, procedo a CONTESTAR LA DEMANDA que concita el asunto sub examine, así:

A. OPORTUNIDAD

Presento al honorable ad quo dentro del término establecido en los Artículos 172, 175, 199 y 200 del C.P.A.C.A., Ley 1437 de 2011, estos últimos modificados por la Ley 2080 de 2021, además de tener en cuenta la ley 2213 de 2022, presento CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

A.I. A LOS INTERESADOS

Frente a los demandantes la Fiscalía General de la Nación se atiene a lo que resulte probado en el proceso dentro de la etapa procesal pertinente.

Frente a los demandados, respetuosamente se solicita desvincular a la Fiscalía General de la Nación, si bien, esta entidad adelantó la investigación, el Fiscal del caso dentro de las facultades constitucionales y legales dadas por el artículo 114 de la Ley 906 de 2004 no tiene la función de dictar o proferir condenas, función misional que se predica del Juez de Conocimiento.

¹ **Artículo 114. Atribuciones.** La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:

1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito.
 2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código.
 3. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.
 5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar.
- La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del Consejo Superior de la Judicatura.
7. Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
 8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
 9. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral.
 10. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar.
 11. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este código.

Se observa que la demanda también está dirigida contra la Rama Judicial, Administración de Justicia y su Representante Legal Director Ejecutivo, respectivamente.

Se evidencia además, que en el actuar de la Fiscalía General de la Nación se dio cumplimiento al artículo 115 de la Ley 906 de 2004, aplicando el Principio de objetividad.

A.II. AL INTERVINIENTE

Tiene competencia legal para hacer la Defensa Jurídica del Estado cuando se trata de situaciones que adviertan futuras condenas en contra de la Nación o de sus entidades adscritas, no se tiene objeción alguna pues es un imperativo legal de obligatorio cumplimiento establecido en el CPACA.

B. INDIVIDUALIZACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

B.1 FRENTE A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE PARTES:

De la persona que presenta reclamación como presunta víctima se determinará con base en lo que resulte probado en el trámite de la demanda de reparación directa, en el entendido que no basta afirmar la condición de propietario sino la real afectación para demandar. Ello frente al uso debido y en lo concerniente a la custodia, tenencia, disposición de la cosa reclamada empero, ante su debida diligencia.

B.2 FRENTE A LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA.

NO se tiene objeción alguna.

B.3 FRENTE A LOS DEMANDADOS:

En la demanda se vincula a la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, quien, por intermedio de su apoderado, propone la excepción de falta de legitimación en la causa por PASIVA, toda vez, que dentro de las funciones de la entidad fiscalía y que están dadas por el artículo 250 Superior, desarrollado en la Ley 906 de 2004, no se encuentran las de **carácter de protección de bienes**, cuando **ellos no han ingresado legalmente y bajo el procedimiento reglado a los parqueaderos dispuestos por la entidad**, como sería la guarda y custodia para los vehículos incautados. Al respecto en el desarrollo de la contestación se presentaran los argumentos de hecho, de derecho y los lineamientos jurisprudenciales del **Tribunal de Cierre** en lo *Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional* que ratifican lo antes señalado.

C. AGOTAMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

Obra en la contestación de la demanda la Constancia No. 2369 de no conciliación y acta de audiencia celebrada el día 26 de enero de 2022, emitida por la Procuraduría 184 Judicial I para Asuntos Administrativos de Popayán, en virtud del numeral 1 del artículo 161 del CPACA.

12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.

13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos por este código.

14. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar.

15. Las demás que le asigne la ley.

Parágrafo. Adicionado por el art. 10, Ley 1142 de 2007, así: El Fiscal General de la Nación o el Fiscal Delegado, según el caso, podrá actuar con el apoyo de otro Fiscal Delegado de cualquier categoría, tanto para la investigación como para la intervención en las audiencias preliminares o de juicio. Esta misma facultad podrá aplicarse en el ejercicio de la defensa

D. A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

D.1. COMPETENCIA FUNCIONAL, TERRITORIAL Y ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

Está determinada en la normatividad vigente.

Sobre el fundamento de la falla en el servicio en que finca la demanda como medio de control reparación directa, la entidad FGN., informa que no están probados los supuestos de hecho y de derecho que *conforman las pretensiones y demás acciones que integran la demanda*, por tanto, desde este momento procesal se solicita la desvinculación del proceso, o su en defecto **negar las pretensiones**, toda vez, que de los *medios de prueba que se allegaron con la demanda* y de las objeciones y las aportadas en la contestación está desvirtuada la responsabilidad de mi representada, pues se tiene prueba fehaciente y certificada que el vehículo de Placas RNZ-330 no ingresó a los parqueaderos que la FGN dispuestos para tal fin.

Sobre el cuántum de la demanda estimado por el demandante con pretensiones indemnizatorias, es bastante oneroso y no obedece a la realidad, *añado a la característica que el daño antijurídico sea cierto*, toda vez, que *no se pueden indemnizar daños supuestos*, pues de ser así se generaría un enriquecimiento sin causa para el demandante y un detrimento patrimonial para el Estado - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, máxime cuando se predica que se está en época de austeridad en el gasto público y los hechos vandálicos donde hurtaron e incendiaron los vehículos fueron ocasionados por terceros ajenos a la entidad fiscal.

Por la cuantía se tiene competencia funcional y territorial por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Circuito de Popayán que admitió la demanda toda vez que el proceso no supera los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

D.2 TERMINO DE CADUCIDAD.

Los hechos donde se ejecutaron los daños materiales por incineración de los vehículos del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Limitada datan del 28 de mayo de 2021.

Se agotó el requisito de procedibilidad según Radicación No. E – 2023-199143 de marzo 30 de 2023 ante la Procuraduría 188 Judicial I en Asuntos Administrativos. Esta la demanda dentro del término perentorio establecido en el CPACA. No se tiene objeción.

La Acción de reparación directa fue estudiada por el Juzgado 5º Administrativo de Popayán, Despacho que emitió Auto Interlocutorio, por medio del cual procedió a admitir la demanda y fue notificada a la FGN el día 27 de junio de 2023.

D.3. FRENTE A LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD - FALLA EN EL SERVICIO POR PÉRDIDA POSESIÓN O TENENCIA DEL BIEN.

No es cierto, toda vez, que la medida de inmovilización del vehículo automotor de Placas RNZ-330 fue ejecutada por personal adscrito a la Policía Nacional de Colombia, Comando Cauca.

Al respecto se informa que, las autoridades de tránsito que en *el ejercicio de la función de policía judicial* acuden al lugar del accidente e inmovilizan el vehículo, deben contar con un sitio o lugar en el cual ubiquen transitoriamente los rodantes para desarrollar los actos urgentes que la normatividad procesal penal ordena.

Este lugar o sitio de parqueo provisional debe ser provisto por el organismo de tránsito correspondiente, pues es éste el que cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de tal labor

(grúas y patios) y **a quien la ley le asignó la función de realizar los actos urgentes en cumplimiento de sus actividades de policía judicial.**

La Fiscalía General de la Nación cuenta con un patio de incautados que para la ciudad de Popayán, se encuentra ubicado en la Vereda San Bernardino en la Carrera 9N, de conocimiento de los señores Fiscales y Funcionarios Judiciales, donde se reciben los rodantes que hayan sido incautados como consecuencia de accidente de tránsito con lesionados y/o fallecidos, una vez se les haya realizado los actos urgentes y se cuente con todos los requisitos a saber:

Oficio firmado por el Fiscal en físico o enviado mediante correo electrónico institucional del Fiscal o del Asistente del Fiscal, en el cual autoriza el ingreso del vehículo al Patio Único en el que se especifique el delito en el que está inmerso el bien.

Estudio Técnico de Identificación Vehicular.

Inventario físico del Bien.

Pantallazo Consulta en SPOA. Módulo Policía Judicial Gestión del Caso, en el cual se exprese la vinculación del vehículo a la noticia y que esta se encuentre activa.

E. MARCO JURÍDICO.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado será patrimonialmente responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de sus agentes, dentro de los cuales se incluyen los funcionarios judiciales.

Entonces son dos los elementos que estructuran la responsabilidad; el primero, el daño antijurídico, entendido jurisprudencialmente como el menoscabo material o inmaterial que sufre la persona con motivo de la acción u omisión del agente estatal, la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento; el segundo, la imputación, entendida como la atribución fáctica y jurídica que del daño se hace al Estado, amén de la conducta activa u omisiva de sus agentes, pero sin que sea determinante, en principio, la evaluación personal de la responsabilidad de éstos, a menos que se juzgue su responsabilidad patrimonial vía repetición.

Ahora bien, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia – Ley 270 de 1996 –, dispone en su artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos cometidos por la acción u omisión de sus agentes judiciales en tres eventos: **a) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia;** b) error jurisdiccional; y c) sic...

En cuanto al "error jurisdiccional", el artículo 66 de la ley 270 de 1996 lo define como "aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley", los presupuestos para su configuración, conforme el artículo 67, ibídem, son:

(i) que se hayan interpuesto los recursos de ley y;

(ii) **que la providencia se encuentre en firme.**

F. FRENTE AL ACCIDENTE DE TRANSITO.

Se tiene información que el accidente de tránsito ocurrió en la fecha mayo 2 de 2021 a las 19:20, horas situación que fue atendido por Servidores Judiciales ajenos a la Fiscalía General de la Nación como obra en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA No. 19807600063720200011700, número Interno 048, y frente al SPOA, se observa que el accidente ocurrió en la fecha antes indicada, con lo cual se predica la **culpa**

exclusiva de la víctima dada la conducción de vehículos como actividad peligrosa² aunado a ello se gesta el **hecho de tercero** en cuanto a la colisión accidente de tránsito que llevo el vehículo a los **patios o parqueadero donde fue incinerado.**

DELITO REFERENTE. LESIONES PESONALES CULPOSAS - MEDIOS MOTORIZADOS.

LEY 599 DE 2000-CAPÍTULO TERCERO - DE LAS LESIONES PERSONALES

CONDUCTA ARTÍCULO. Tipos Penales	DEFINICIÓN
111	Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los Artículos siguientes.
112	Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de sic... Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de sic... Si pasare de noventa (90) días, la pena será de sic... (Penas aumentadas por el Art 14 de la ley 890 de 2004.)
113	Deformidad. Modificado por el art. 2, Ley 1639 de 2013. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de sic... Si fuere permanente, la pena será de sic... Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará desde sic...
114	Perturbación funcional. Si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de sic... Si fuere permanente, la pena será sic...
115	Perturbación psíquica. Si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de Si fuere permanente, la pena será sic...
116	Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de sic... La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. (Penas aumentadas por el Art 14 de la ley 890 de 2004.)
116A	Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que sic...
117	Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los Artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.
118	Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes
119	Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores, concorra alguna de las circunstancias señaladas en el Artículo 104 las respectivas penas se aumentaran de una tercera parte a la mitad.
120	Lesiones culposas. El que <u>por culpa</u> cause <u>a otro alguna de las lesiones</u> a que se <u>refieren</u> los <u>artículos anteriores</u> , incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes.

² "La actividad peligrosa es pues, aquella que, ya en su estructura ora en su comportamiento, con cosas inertes o en movimiento o raramente sin el uso de ellas, genera más probabilidades de daño de las que usualmente puede un ser humano promedio soportar y repeler, es aquella cuyos efectos se vuelven incontrolables, imprevisibles, devastadores por la multiplicación de energía y movimiento que supone o le es inherente, efectos además inciertos por su capacidad de destrozo mayor. En esta tarea, que el legislador ha delegado tácitamente al juez, pues no existe definición de lo que ha de entenderse por actividad peligrosa ni menos un catálogo de las que se tengan por tales, debe echar mano aquel de todos estos tópicos, de modo que no sea el capricho o el mero subjetivismo el criterio que predomine a la hora de encasillar una en particular dentro de esta categoría." Corte Suprema de Justicia.

PRESCRIPCIÓN PENAS Disminuida de ¾ a la ½ Precaria	Cuando la conducta culposa sea cometida <u>utilizando medios motorizados</u> o arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de
121	Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las circunstancias de agravación previstas en el ARTÍCULO 110 , lo serán también de las lesiones culposas y las penas previstas para este delito se aumentarán en la proporción indicada en ese ARTÍCULO .

Con base y en atención a lo anterior la Fiscalía le corresponde y le asiste legalmente es la **investigación** y establecer con grado de certeza en que conducta punible se encuadra la **lesión personal** acaecida y puesta para su conocimiento, e investigación, igualmente realizar su **programa metodológico** en aras de impartir **órdenes a policía judicial** para el esclarecimiento de los hechos denunciados y que se predica del aquí INDICIADO, en calidad de demandante (*extremo de la Litis*)

Empero, la entidad que represento sería responsable de la incineración provocada del vehículo, por terceros ajenos a la Entidad, si hubiere estado (la Cosa) o el mismo rodante incautado en las instalaciones internas o en el **Parqueadero de la Fiscalía**.

Ahora el procedimiento reglado para la Autorización de vehículos siniestrados, es ante su juez natural competente, claro está ello, una vez se tengan las experticias (*Para caso que ocupa fueron realizadas por particulares*); y la **Plena Identificación** del vehículo automotor conforme a las previsiones establecidas en el Código de Procedimiento Penal – Actos Urgentes – Policía Judicial, que deben ser materializadas en el formato (FPJ-13) BIT- PROCEDIMIENTOS FISCALÍA – POLICÍA NACIONAL, ante y el vehículo que está involucrado en el *siniestro ocurrido por el accidente de tránsito enmarcado como de LESIONES CULPOSAS*.

Lo anterior conforme a sus procedimientos internos REGLADOS de *Altas y de Bajas* cuando se requieren entregas de los velocípedos, *empero*, se aclara que a quien le asiste competencial jurisdiccional y funcional para que la fiscalía realice la Baja del vehículo y se le entregue a su propietario o abogado o dependiente judicial y en cuanto a las actuaciones y verificaciones si cumple o no con los requisitos de la entrega le corresponde y es ante el **Juez Constitucional de Garantías** se itera para las [E]ntregas.

Lo anterior su Señoría denota que la Fiscalía en cumplimiento de las normas que regulan funciones de policía judicial y frente a la incautación de vehículos en sus parqueaderos le asiste tomar Póliza de Seguros a efecto de pagar su siniestralidad cuando ocurren dentro de sus instalaciones, con razón o con ocasión de la *Tenencia y Custodia* de bienes donde se tiene la responsabilidad y manejo, además y en atención a la **Teoría de la Previsión**, y ante situaciones que se gestan intempestivamente y parten de la **Teoría del Riesgo**, que para el caso que ocupa el vehículo debía haber estado amparado con Seguro contra Riesgo, dada la actividad peligrosa que denota la conducencia de vehículos rodantes.

En ese orden de ideas y frente a la investigación penal no le asiste legitimación en la causa por pasiva.

G. FRENTE AL INCENDIO

El siniestro ocurrió en la fecha mayo 28 de 2021, en el parqueadero Centro Diagnóstico Automotor CDA en la ciudad de Popayán ubicado en la carrera 6ª No. 9 - 55. Donde funciona el parqueadero oficial del municipio de Popayán, Cauca.

Se establece que entre la CDA LTDA, y la Fiscalía **no tienen o no se cuenta con ninguna clase de contrato o convenio con esa Entidad**, es decir, el propietario es un tercero ajeno a la Fiscalía, como obra en el contrato suscrito entre la Alcaldía Municipal de Popayán y el representante legal del parqueadero, para probanza de esta situación particular y concreta se tiene prueba (contrato) que arrojó la parte Actora.

Dentro del plenario no se probó que el PARQUEADERO, sea de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, o que se tenga un contrato de depósito con el Parqueadero aludido.

Revisado el expediente contenido con la demanda se tiene contrato entre el Municipio de Popayán y El Centro de Diagnóstico Automotor Ltda., con cláusulas **expresas de tener garantías para responsabilidad civil contractual y extracontractual, en atención a las cláusulas 23 y 26 del contrato** por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación *Coadyuva el llamamiento en garantía en la cual se vincula a la compañía de seguros que ampara los siniestros y en amparo de la entidad tomadora del seguro. Yendo más allá en el evento que se Superen los topes, en caso de condena, se tenga en cuenta el Contrato de Seguro con la Póliza Previ-alcaldía – Ente Territorial Popayán.*

G.1.- JURISPRUDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACIÓN CIVIL.

G.1.1.- RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL-Presunción de guardián de quien figura como propietario del vehículo, desvirtuada mediante la prueba de la transferencia de su poder de dirección y control, por haber celebrado contrato de compraventa con entrega material al comprador, **sin registro del traspaso en la oficina competente.** (SC4750-2018; 31/10/2018)

G.1.2.- RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS-Diferencia entre el sistema de responsabilidad del Código Civil Colombiano y el modelo francés. Eventos en que se ha aplicado en el derecho de propiedad y en los casos de responsabilidad extracontractual establecidos en los artículos 2353, 2354, 2355 y 2356 del Código Civil. (SC4750-2018; 31/10/2018)

G.1.3.- GUARDIÁN DE LA COSA- Concepto. Comprende la obligación de guardia, custodia y control que sobre las cosas animadas o inanimadas ha de ejercer su dueño, tenedor efectivo o poseedor natural. Noción tomada de la jurisprudencia francesa. Eventos en que se ha previsto su aplicación en el derecho colombiano. Presunción de culpa y exoneración mediante prueba de elemento extraño. Figura de la guardia compartida. Reiteración de la sentencia de 22 de abril de 1997. (SC4750-2018; 31/10/2018)

"Es destacable entonces que en este tipo de responsabilidad civil extracontractual, que el sistema colombiano ha denominado por actividades peligrosas, el débito pueda generarse a partir del uso de cosas no obstante que el énfasis recaiga en la actividad y su connotación riesgosa. Y de allí que desde bien temprano la Corte haya tomado de la jurisprudencia francesa la noción del guardián de la cosa (peligrosa), luego extendida a la actividad. Por supuesto que esa cosa o actividad deben tener parte activa en la causación del perjuicio, presupuesto que, por otra parte, no es una noción moderna pues desde el derecho romano ya se contemplaba."

G.1.1.4.- RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN-Elementos estructurales para su prosperidad. El guardián de la cosa puede desvirtuar que transfirió su poder de dirección y control o que éste le fue arrebatado. Aplicación del artículo 2356 del Código Civil a las actividades que con cosas o sin ellas son riesgosas. Reiteración de las sentencias de 4 de junio de 1992, 17 de mayo de 2011, 4 de abril de 2013 y 8 abril de 2014. (SC4750-2018; 31/10/2018)

"De modo que a más de acreditar en el proceso el daño cierto, el factor de imputación (culpa, riesgo, etc. salvo que la ley lo presuma) y el nexo causal entre el daño y la conducta del agente, en esta responsabilidad por el hecho de las cosas deben estar también corroborados otros elementos: la relación del sujeto pretensamente responsable con la cosa de forma que se le pueda endilgar la calidad de guardián, y la actividad misma de esa cosa como causante directa o indirecta del perjuicio, actividad que si es peligrosa allana el camino para la aplicación del artículo 2356 de acuerdo con su decantada interpretación."

"(...) En el fondo, al que tiene el poder de control se le carga y exige el cumplimiento de la obligación de custodia y guarda de la cosa con la cual se causa el perjuicio. Esa guardianía en principio recae en el propietario pero puede desvirtuarse éste si demuestra que transfirió ese poder sobre la cosa a otra persona o si esta le fue arrebatada, porque lo que en últimas está en juego es, más que la guarda jurídica, una especie de obligación de quien material o intelectualmente manipula y se vale de una cosa, que ella no cause perjuicios a terceros. Más, preciso es establecer que todo cuanto viene dicho, referido a las cosas peligrosas, la Corte lo ha venido aplicando con propiedad y a tono con el artículo 2356, a la actividad que con cosas o sin ellas son riesgosas; y así, el guardián de esta se hace responsable de los daños en los términos de tal precepto.

H. SOBRE EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se tiene que este opera en forma residual para aquellos eventos distintos a los expuestos en los artículos 66 y 68 de la citada ley, en que el daño antijurídico se sufre por actuaciones que no están consignadas en una providencia judicial, sino en la actuación de los funcionarios de la justicia.

Al respecto el Consejo de Estado sostuvo:

"En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales –distintas a la expedición de providencias– necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales; en efecto, en relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con unas u otras se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios³ "

I. ANÁLISIS FÁCTICA FRENTE A LAS PRETENSIONES.

El demandante por medio del abogado solicita se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los supuestos daños y perjuicios causados a las víctimas con ocasión de la inmovilización e incautación del rodante Vehículo CHANA, Línea STAR Van SC 6390, Color Plata Placas **KAV-976**. Como se sustentó anteriormente, toda vez que la medida preventiva frente al automotor era proporcional, necesaria y razonable dada la connotación del tipo penal (LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO.) al cual se vio vinculado el rodante y conforme al tema del bien con ocasión de lo establecido en el artículo 92 y siguientes del C.P.P.

Ahora bien frente al informe del primer Respondiente Policía de Carreteras, se tiene siniestro por accidente de tránsito de fecha junio 23 de 2020, en horas de la mañana, conductores involucrados FRANKIN YIMAIR MUÑOZ HOYOS, y JAIME LONDOÑO HERNANDEZ, el cual se tiene que el accidente de tránsito ocurrió en la vía panamericana la altura del kilómetro 114 + 300 en la zona los Robles vía que de Popayan conduce a Timbio Cauca.

A cláusula Segunda, contrato de transacción (artículo 2469 Código Civil) a folio 5 anexos demanda, se estableció: *sic... quien en ese momento lo conducía, pero este ya se encontraba siniestrado en la vía*

³ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015). Radicación número: 76001-23-31-000-2006-00871-01(36634). Actor: LUIS ARMANDO CARPIO CAICEDO. Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

panamericana, por lo que en el informe policial de accidentes de tránsito No. 19807000 y el informe de experticia técnica de policía afirma que: **"Falta de Señal en vehículo varado"**.

AUDIENCIA CELEBRADA ANTE JUEZ CONSTITUCIONAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS

Fecha de audiencia Febrero 15 de 2021 hora inicio 11:47 A. M. - hora termina 12:23 P.M. Folios 22 a 25 Anexos demanda.

Juzgado 2º Promiscuo Municipal – adscrito municipio de Timbio Cauca.

No. SPOA. 1980760063720200011700 No. Interno 048.

Dentro de los apartes se transcribe por qué no hace la entrega provisional de lo cual se tiene:

"...(...)...sic... solicita entrega provisional del vehículo de placas .KAV916, marca CHANA, color PLATA, servicio PARTICULAR, modelo 2009, numero de motor JL465Q5856AC055468, numero de chasis LS4BAB3DX9G001906. La señora Nancy Elena Bastidas presenta su argumentación jurídica basada en que solicita la entrega - provisional del vehículo en calidad de propietaria, sin embargo aclara que el vehículo se encuentra actualmente a nombre de otra persona que fue quien se lo vendió días antes del accidente de tránsito, manifiesta tener una carta abierta que certifica que es la poseedora en este momento del — vehículo, presenta también el SOAT, el certificado de tradición actualizado, un poder, carta abierta del ministerio, cedula de ciudadanía del anterior dueño el señor ROBINSON ANTONIO FRANCO y contrato de compraventa del vehículo, manifiesta pues que los ya mencionados documentos son el soporte que tiene para garantizar la legitimidad del proceso de legalización del vehículo, realiza el traslado de los ya mencionados elementos materiales probatorios a la Fiscalía. El señor fiscal hace un recuento de los hechos acaecidos el día 24 de junio de 2020 siendo aproximadamente las 5:30 PM, el cual tuvo como acontecimiento el choque de dos vehículos; como elemento material número 1 se ubicó fuera de la calzada un vehículo tipo campero de placas TER 162 conducido por el señor FRANKLIN YIMAR HOYOS residente en la vereda las Guacas y como elemento número 2 se ubicó a un costado en la calzada una camioneta de placas KAV916 conducido por el señor JAIME LONDONO HERNANDEZ residente en el municipio de Guacari quien sufre traumatismos múltiples, trauma cráneo encefálico severo y trauma -cerrado de tórax; en este orden de ideas dentro de los EMP reposa un informe rendida por el profesional de gestión dos el señor JOSE RAUL MANRIQUE TRIANA experto en automotores, quien menciona en su interpretación de resultados de lo expuesto anteriormente que el vehículo automotor elemento de estudio al momento de la diligencia queda identificado técnicamente con el serial chasis, numero de plaquetas serial y el número de motor, se informa que el rango número de la placa KAV916 al momento se encuentra en la secretaria de transito de la Unión Nariño y las características de elaboración están acordes a las exigidas por el ministerio de transporte, dicho informe sustenta de que las improntas, serie de chasis y plaqueta serial son originales de fábrica, no han sido alteradas y corresponden estos datos al certificado de tradición que aporta la solicitante; si bien es cierto **la solicitante aporta el certificado de tradición pero se observa que se encuentra a nombre de otra persona quien responde al nombre de OSCAR CASTANO TAMAYO identificado con el número de cedula 16.400.695 de Toro (Valle)**, quien a su vez le vende el vehículo al señor ROBINSON ANTONIO FRANCO SÁNCHEZ identificado con el número de cedula 6.526.821 del Dovio (Valle) y quien le vende a la señora NANCY ELENA BASTIDAS, el cual le fue comprado al señor Franco 8 días antes del accidente. Si bien el artículo 100 del CPP habla acerca del poseedor o tenedor legitima salvo que se haya decretado su embargo o secuestro en este evento este **delegado se OPONDRÁ a la solicitud provisional de este vehículo teniendo en cuenta que así la tradición del vehículo se encuentre a simple vista clara, se ha vendido dicho vehículo en dos oportunidades**, existen unos documentos que están en blanco obrando como cartas abiertas y sería oportuno que este tipo de solicitud se presente una autorización expedida por parte de la persona que reposa en el certificado de tradición confiriéndole el poder a la señora MANCY ELENA BASTIDAS, de solicitar la entrega provisional de dicho vehículo, mencionado lo anterior el señor Fiscal

no coadyuva la solicitud de entrega provisional de dicho vehículo hasta tanto no haya un oficio por parte del propietario legítimo de este vehículo para tal solicitud”

DECISIÓN:

RESUELVE.- PRIMERO. NO ACCEDER A LA ENTREGA PROVISIONAL, del vehículo de Placas KAV 796, marca CHANA, Color Plata, Servicio Particular, modelo 2009, numero de motor JL465Q5856AC055468, numero de chasis LS4BAB3DX9G001906, de **propiedad actualmente del señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.400.695 de Toro (Valle); *sin embargo la señora NANCY ELENA BASTIDAS, podrá presentar una nueva solicitud para la entrega provisional del vehículo referenciado siempre y cuando presente todos los documentos completos y garantice de que es la legítima propietaria del vehículo.* SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo sic...

Se tiene igualmente contrato de compraventa y contrato de mandato de fecha mayo 20 de 2020. Suscrito entre **OSCAR CASTAÑO TAMAYO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.400.695 de Toro (Valle), y la aquí demandante señora NANCY ELENA BASTIDAS.

Debe tener en cuenta su Señoría Ad quo, que en el contrato de compraventa a folios (9) parte final y folio (10) se tiene inmersa la cláusula CUARTA, OBLIGACIONES DEL VENDEDOR: EL (LOS) VENDEDOR(ES) hace entrega del vehículo en perfecto estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, comparendos de tránsito, pactos de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente contrato, igualmente EL VENDEDOR (o EL COMPRADOR) se obligan a realizar las gestiones del traspaso ante las autoridades de tránsito dentro de los 80 días calendario, días posteriores a la firma de este contrato. QUINTA, sic....(...)... se firmó en la Unión Valle a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020.

Se tiene que los 80 días posteriores a la firma del contrato se cumplieron a los ocho días del mes de julio de 2020.

Con lo anterior se itera culpa exclusiva de la víctima, aquí demandante.

Su señoría si miramos la **línea de tiempo**, contrato de compraventa de vehículo **mayo 20 de 2020**, fecha del siniestro accidente de tránsito **junio 23 de 2020**, fecha de incineración del vehículo en un parqueadero que no es propiedad de la Fiscalía (Responsabilidad del Guardián) Situación fáctica que nos convoca **mayo 28 de 2021**, se ARGUYE, sin mayor esfuerzo se observa la **falta de diligencia** por parte de la aquí demandante, la cual no realizó en tiempo las actuaciones respectivas para obtener la **propiedad del vehículo**, *registrarlo ante la oficina de tránsito respectiva, acudir a las oficinas para realizar los trámites correspondientes en la actualización del vehículo adquirido mediante contrato de compraventa*, asume su propia culpa, en lo tocante con accidentes de tránsito, **el esquema de presumir el elemento subjetivo de la responsabilidad**, en estricto sentido, se encamina por la *responsabilidad con riesgo u objetiva* en donde el juicio de imputación subjetiva (negligencia, impericia o imprudencia), **ningún papel juega, ni constituye** un *presupuesto en la hermenéutica del artículo 2356 del Código Civil*, por cuanto no basta probar la diligencia o cuidado para exonerarse de responsabilidad.

Al respecto, me opongo a las pretensiones indemnizatorias perseguidas por la parte demandante y solicito a su Señoría, que sean desestimadas, puesto que no están llamadas a prosperar, como quiera que de la lectura de la demanda y de sus anexos, se evidencia que la parte demandante pretende el resarcimiento de daños que en su sentir le ocasionó la Fiscalía General de la Nación por una presunta **FALLA EN EL SERVICIO**; presupuesto que no obedece a la realidad, en el caso se predica:

i) hecho exclusivo de un tercero,

- ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva,
- iii) ausencia de nexo causal entre la actividad de la FGN y los hechos generadores del siniestro, por tanto, se da la de
- iv) ausencia de falla en el servicio y
- v) la inexistencia de fundamentos que permitan estructurar la responsabilidad patrimonial, extra-patrimonial o administrativa de mi representada, con base en los argumentos que expondré en el acápite de EXCEPCIONES y FUNDAMENTOS Y/O RAZONES DE DERECHO, respectivamente.

El declarar lo contrario sería abrogarle al ente investigador un desacato al articulado constitucional y abuso en el ejercicio de funciones públicas.

"Artículo 121—Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley."

I.1. DECLARATIVAS:

Me opongo, está probado que el vehículo de Placas KAV 796, marca CHANA, Color Plata, Servicio Particular, modelo 2009, el cual no ingresó a los parqueaderos de la Fiscalía General de la Nación, por tanto, la entidad no tuvo el control, la custodia ni el cuidado real del mismo.

Se observa además, que la disposición y entrega del bien era de competencia del Juez de Control de Garantías en Audiencia de entrega provisional de vehículo en delito culposos lesiones personales culposos artículos 110 a 120 Código Penal. Con el agravante que por no ser la propietaria le fue negado la entrega provisional, por la falta de diligencia, descuido en cuanto al vehículo adquirido a través de contrato de compraventa de fecha mayo 20 de 2020. Con la línea del tiempo se analiza que después de transcurrir un (1) año más ocho (8) días estando el vehículo en el parqueadero **Centro Diagnostico Automotor** en atención y por la suscripción de un Contrato Interadministrativo No. 201680001327 de fecha octubre 6 de 2016, entre este particular y el municipio de Popayán, Cauca, se presentó el siniestro de incendio provocado por terceros, es decir en fecha mayo 28 de 2021.

I.2. CONDENATORIAS.

Me opongo, por cuanto la Fiscalía al recibir la denuncia penal debía ordenar inicialmente los actos urgentes, tendientes al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación penal, máxime cuando se trataba de un delito culposos lesiones personales en accidente de tránsito, al igual de no ser la propietaria y estar mal asesorada por el abogado que le asistió a la audiencia de entrega provisional del vehículo ante el Juez constitucional con Fuñones de Control de Garantías adscrito al Juzgado 2º Promiscuo municipal de Timbio Cauca con persona lesionada.

I.2.1. El objetivo de la demanda aunado a las pretensiones de la misma, son netamente reparatorias como consecuencia del incendio ocasionado en el parqueadero de la secretaría municipal el municipio de Popayán, Cauca, el día 28 de mayo de 2021, en desarrollo de protestas.

I.2.2. Para la Fiscalía General de la Nación se presenta la excepción del **hecho de un tercero**, presunto daño reclamado por particulares -protestas que se generaron en vandalismo, así las cosas, el hecho de un tercero, como ocurrió en el caso en estudio, consiste en la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado, en la producción de un daño, como lo demuestra la parte activa (extremo de la Litis) en el escrito de la demanda medio de control acción de reparación en consecuencia, la FGN no está llamada a responder por los presuntos perjuicios que pretende reclamar la parte actora. Aunado a ello culpa exclusiva de la víctima poseedora del vehículo incinerado.

I.3. CASO FORTUITO

Se presenta en el presente caso una causa extraña que destruye el nexo de causalidad entre la actuación u omisión administrativa y el daño irrogado -o de una causal de exoneración- por lo siguiente:

- 3.1- Su irresistibilidad;
- 3.2.- Su imprevisibilidad y
- 3.3.- Su exterioridad respecto del demandado.

I.4. Ausencia de falla del servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación, ***no basta con atestiguar la concreción de un daño, sino que el mismo, debe ser cierto, personal y sobre todo antijurídico***, siendo elementos esenciales estos, que ante la ausencia de uno de ellos *se torna improcedente la indemnización deprecada*.

I.5. No hay una relación de causalidad, con ocasión del supuesto daño producido y el actuar del ente acusador, para lo cual es importante apreciar la noción frente al nexo causal – siendo el nexo causal la determinación de que un hecho es la causa de un daño, en esa medida, y en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario determinar si la conducta imputada a la administración fue la causa eficiente y determinante del daño que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados.

I.6. La fiscalía general a través de la dirección seccional de fiscalías del cauca, ha adelantado su función misional y consultada el sistema misional **Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA-**, 19807600063720200011700, se encuentra registro en el cual el aquí demandante aparece como indiciado del delito de lesiones personales en accidente de tránsito por los hechos sucedidos el 28 de mayo de 2021.

I.7.- Culpa exclusiva del dueño del vehículo al no ser diligente para recuperar el vehículo, dado que establece que solicito a la Fiscalía General de la Nación la entrega del vehículo, cuando **es conocido que en la solicitud de entrega le fue negada por no ser la propietaria, negación de la entrega del vehículo que estableciera el Juez Constitucional con Funciones de Control de Garantías**, por lo cual con ocasión del derecho de postulación establecido en el artículo 74 de la ley 1564 de 2012, en armonía con el artículo 229 Superior, **la representación legal o la defensa técnica se caracteriza por ser pasiva, y desconocimiento de los procedimientos en cuanto a la propiedad de los bienes como lo fue el vehículo adquirido a través de contrato de compra venta**, lo que desbarajusta la estructura de la responsabilidad aquí pedida, ya que son meramente actividades de gestión caracterizadas por ser pasivas frente al daño causado al aquí demandante y el nexo causal entre este y aquella.

Igualmente por la actividad de riesgo, y frente a la teoría de la Previsión debió tenerle al vehículo incinerado una póliza contra todo riesgo, adquirir el traspaso respectivo e inscribirlo en la oficina de tránsito respectiva, a fin de la reclamación ante la presente acción de responsabilidad civil extracontractual que propenda por el resarcimiento de los perjuicios derivados del accidente de tránsito relatado en la demanda, de donde encuentra su principal fundamento en el artículo 2341 del Código Civil, que impone a quien ha cometido delito o culpa infringiendo daño a otro el deber de indemnizarlo.

Es desacertado, entonces, enfocar por el demandante alegando la culpa de la Fiscalía, cuando en el expediente no se tienen actuaciones que la involucren como responsable del incendio el cual ocurrió en un bien inmueble que no es de propiedad de la Fiscalía, lo anterior toda vez que *sólo puede endilgarse de responsabilidad cuando se pruebe el nexo de la causalidad*.

Ahora si una vez agotada el valor estimatorio cancelado por la Compañía de Seguros llamada en Garantía, frente a los múltiples demandas, y se agoten los toques para la indemnización, la Fiscalía itera y solicita se llame a la **Previsora de Seguros**, la cual es la garante del Ente Territorial del municipio de Popayán para la indemnización de los vehículos que han demandado por el mismo hecho ocurrido y aquí debatido, claro está en caso de condena al municipio.

El Seguro Voluntario de Automóvil, la garantía de responsabilidad civil voluntaria. Responsabilidad civil y entidades aseguradoras. El derecho de repetición en el seguro del automóvil. Aplican para éstas situaciones presentadas.

Así, la póliza del vehículo contiene una parte que es la correspondiente al tomador y la otra al asegurado, por lo cual debe hacerse énfasis en la salvedad correspondiente en cuanto a daños materiales, y el de responsabilidad por culpa del tomador en el vehículo bien sea por robo, o vandalismo, o incendio.

Finalmente, se solicita en forma respetuosa al Juzgado 5º Contencioso Administrativo de Popayán, que las pretensiones que no se trataron en la conciliación prejudicial, no sean objeto de debate en la Demanda de Reparación Directa, toda vez, que respeto de estos supuestos facticos no se agotó el requisito de procedibilidad que ordena la norma procesal administrativa.

J. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES

J.1. AL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER. Atendiendo la normatividad vigente, los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal de Cierre en materia de RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PERDIDA DE POSESIÓN O TENENCIA DEL BIEN y la DOCTRINA CONSTITUCIONAL presento las siguientes precisiones:

J.1.1. Ausencia de falla en el servicio por parte de la FGN, por estar probado que el bien de Placas KAV - 796 no ingresó a las esferas de la entidad y la decisión de entrega del bien en forma provisional y/o definitiva correspondía al Juez de Control de Garantías, Empero, **CUANDO ACREDITARE SU PROPIEDAD.**

J.1.2. Inexistencia del daño antijurídico: de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que corresponde al juez de control de garantías impartir legalidad a la inmovilización, incautación y la posterior entrega del bien luego de analizar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas encontrando que las dos iniciales se ajustaban a criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues se investigaba un delito de LESIONES PERSONALES artículos 111 a 120 Código Penal.

J.1.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva: de acuerdo al tercer presupuesto de La Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, en el sentido de determinar cuál es la autoridad que debe reparar el daño se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la decisión de imponer la medida de suspensión del poder dispositivo es una facultad jurisdiccional atribuida a los jueces de control de garantías como ocurrió en el presente caso. Artículo 100 C.P.P., aunado a que el vehículo en ningún momento ingresó al Parqueadero dispuesto por la FGN para tal fin.

J.1.4. Excepción exonerativa de responsabilidad: en el caso en estudio se presenta el hecho de un tercero, pues fue un hecho notorio que un grupo de vándalos y delincuentes atacaron con artefactos explosivos e incendiarios las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, acciones totalmente ajenas a la entidad que represento. No se observa denuncia en tal sentido, en lo que el demandante refiere que se conocía del posible atentado.

J.1.5. Reclamación administrativa ante Compañías de Seguros:

De otra parte, las entidades del Nivel Territorial debieron adelantar las respectivas reclamaciones ante la Compañía de Seguros tendiente a lograr la indemnización del siniestro presentado por los bienes incinerados. Trámite administrativo que debía realizarse en virtud de las Pólizas Globales Previsora Alcaldías – Seguro Responsabilidad civil, Póliza responsabilidad civil; y la de responsabilidad contractual y extracontractual pactada en el Convenio interadministrativo No. **20161800013327** del 6-10-2016, celebrado entre el Municipio de Popayán y el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán.

J.1.6. HECHOS DE VANDALISMO E INCENDIO.

Son hechos que deben estar garantizados y protegidos con las respectivas pólizas, a fin de salvaguardar el patrimonio público de la entidad territorial como son las Pólizas contra todo riesgo.

Igualmente, se solicita que en la valoración probatoria se tengan de presente las actuaciones jurisdiccionales, de fondo o sustanciales emitidas por el Juez con Funciones de Control de Garantías, propias de las Audiencias Preliminares a saber: legalización de la inmovilización e incautación del vehículo que no son de resorte de la Fiscalía General de la Nación.

K. COSTAS PROCESALES.

Procedo a solicitar muy respetuosamente al Honorable Juez no condenar en costas a la FGN., toda vez, que no están probados los presupuestos del artículo 188 del C.P.A.C.A., de la revisión del proceso penal se tiene que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de sus funciones, de buena fe, sus actuaciones se desarrollaron al tenor de lo citado en el artículo 6° de la Constitución Política, acatando las garantías constitucionales, el Principio de legalidad, el Debido proceso y sin extralimitación alguna.

Además de lo anterior, no se cumplen las reglas del artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso que dan lugar a las costas, ni se actuó con temeridad o mala fe.

Con relación a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrada Ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez en sentencia del 5 de agosto de 2010, señaló:

"(...) CONDUCTA TEMERARIA O MALA FE EN EL PROCESO – Existencia

Son deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensa y en el ejercicio de los derechos procesales (artículo 71 del C.P.C. – numerales 1° y 2°). Se considera que ha existido temeridad o mala fe cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso (artículo 74 numeral 5° ibídem)"

El Honorable Consejo de Estado por su parte, ha señalado:

"(...) solo cuando el Juez, después de valorar la conducta de las partes, compruebe que hubo uso abusivo de los medios procesales es del caso condenar en costas lo que, contrario sensu, significa que si la conducta procesal fue correcta no es posible acceder a la condena en costas." (Sentencia 25 de mayo de 2006 Subsección B, C. P. Dr. Jesús María Lemos, Radicación N°. 25000-23-25- 000-2001-04955-01 (2427-2004) Demandado: BOGOTÁ D.C.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN).

En el caso en debate no se debe imponer condena en costas, pues no están acreditados los gastos procesales, además no se evidencian actuaciones procesales que ameriten una condena en tal sentido.

Sin embargo, en atención a varios pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con el artículo 188 del CPACA, es decir sin que se haya presentado una sentencia de unificación, también se ha señalado la tesis subjetiva, esto es, que el juez tiene la potestad de determinar la procedencia o no de

la condena en costas en contra de la parte que ha visto frustrada sus pretensiones, para que se analice en cada caso particular si hay lugar a imponer costas y agencias en derecho a la parte vencida, tal como lo interpretó el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón, Bogotá 22 de abril de 2015, radicación Nro. 68001233100020130007501 (1648-2014), en donde se dispuso:

"(...) la norma contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de disponer, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia".

Esta misma posición ya había sido expuesta por el Consejo de Estado, Sección primera, Magistrado Ponente Guillermo Vargas Ayala, en sentencia de 16 de abril de 2015, Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00446-01:

"(...) Si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión "dispondrá", lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales (...). Como quiera que este proceso fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no hay lugar a predicar que sea de aquellos en los cuales se esté ventilando un interés público y bajo esa perspectiva se hace necesario entrar a disponer sobre la condena en costas, por cuanto el interés involucrado en esta instancia es sin lugar a dudas de carácter individual, al estar referido en forma exclusiva a la órbita particular de la parte que promovió el recurso de apelación que ahora se decide."

La posición también había sido acogida con anterioridad por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Magistrado Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, el 19 de enero de 2015, Radicación número: 25000-23-42-000-2012-00701-01(4583-13):

"Debe quedar claro que la referida disposición no impuso al funcionario judicial la obligación de "condenar" en costas, sino la de "disponer" sobre las costas, esto es, la de pronunciarse sobre la procedencia o no de imponerlas. Bajo esta preceptiva, resulta evidente que, si bien en el texto actual que regula la actuación judicial en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) ya no obra la previsión que antaño contenía el artículo 171 del Decreto 1 de 1984, referida a la potestad de imponer condena en costas "...teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes...", también lo es que el nuevo articulado no impone una camisa de fuerza "automática" frente al vencido en el litigio, por lo que, comprendiendo que tal condena es el resultado de una serie de factores tales como, por ejemplo, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, será el respectivo director del proceso quien, ponderando tales circunstancias, se pronuncie con la debida sustentación sobre su procedencia. Esta interpretación resulta consonante con lo prevenido por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, hoy consignado en el artículo 365 del Código General del Proceso, que dispone que la condena en costas se impondrá en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos "...en que haya controversia...", y "...sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación".

L. FRENTE A LOS HECHOS

L.1. A LAS PRETENSIONES:

La Fiscalía general de la Nación, se opone a la pretensión consistente en el reconocimiento y pago de indemnización por perjuicios inmateriales en los rubros: Morales, daño emergente, de la señora **NANCY ELENA BASTIDAS**, por hechos sucedidos en la ciudad de Popayán, en la fecha mayo 28 de 2021, como se entrará a probar en el decurso procesal.

Consecuente con lo anterior, esta entidad se opone a la indemnización del Perjudicado directo, reiterando que la Fiscalía en cumplimiento de la Estructura del Proceso Penal, una vez se requirió por el Togado de la parte Accionante solicitó la Celebración de la Audiencia para la Entrega Provisional del Rodante Placas KAV 796, la cual fue negada por el Juez natural penal, fecha febrero 15 de 2021 folios 22 a 25 anexos demanda, para efectos de individualizar el vehículo, su propietario y este se encuentre identificado con los datos especificados en el croquis y actos urgentes que adelanto la Policía de Carreteras, reiterando que la Fiscalía plasma su actuación en cumplimiento de un deber legal por mandato del artículo 250 Superior en armonía con la ley 906 de 2004 y el tipo penal consignado en los artículos 111 a 120 del Código Penal.

Es necesario que los abogados nos familiaricemos con el tema de la investigación criminal, para así a la hora que cuando se llegue al Juicio Oral podamos controvertir y tener el conocimiento de la experticia que ha sido realizada por los distintos peritos. En esta etapa deben recolectarse las diversas entrevistas que se logren conseguir de los posibles testigos frente al hecho; así mismo realizar la correcta recolección, embalaje y rotulación de los elementos materiales probatorios y evidencia física encontrada, para así poder cumplir con la cadena de custodia, garantizando la conservación aseguramiento de éstos, y su consiguiente validez dentro de la investigación.

Conforme a lo anterior se puede argüir que el Funcionario de Policía Judicial que tramita los formatos de policía judicial, lo hace en cumplimiento legal de las funciones y el fin era establecer las características del vehículo involucrado en lesiones personales culposas.

Las pretensiones en el escrito de la demanda detalladas se tienen así:

- 1.- Por perjuicios morales el equivalente a 100 SMLMV. Para la señora **NANCY ELENA BASTIDAS**.
- 2.- Por perjuicios materiales en el rubro de daño emergente el equivalente \$50.000.000 conforme a la demanda incoada. Se resalta que el daño emergente por gastos de transporte está en CERO pesos.

Adicionalmente, téngase en cuenta que, en relación con los perjuicios solicitados, no hay lugar a su declaración, puesto que las actuaciones de mí representada Fiscalía cumple dentro del proceso penal y en cuanto a los términos con su obligación legal que le asiste para esclarecer el accidente, el vehículo nunca entró a los parqueaderos de la Fiscalía, como se demuestra con la prueba que se arrima por parte de la oficina administradora de Bienes y en especial el tema de parqueaderos.

De otra parte, la cuantía establecida en la estimación razonada de la misma, a efectos del reconocimiento de perjuicios para la demandante NANCY ELENA BASTIDAS, específicamente por cuenta de los perjuicios morales y perjuicios a título de daño emergente, correspondiendo anotar que con la demanda se acompañan ínfimas pruebas que no acreditan totalmente estos perjuicios.

Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente se solicita que de antemano. Aun en caso de una declaratoria de responsabilidad administrativa, despache desfavorablemente la pretensión al reconocimiento y pago de sumas de dinero por estos conceptos.

M. RESPECTO A LOS DAÑOS MORALES – PERJUICIOS INMATERIALES SUJETIVOS

Al señor NANCY ELENA BASTIDAS en su calidad de víctima directa la suma de dinero equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las pretensiones no están llamadas a prosperar toda vez que la Fiscalía, no le ha causado daño alguno, si tenemos en cuenta que causa del accidente de tránsito padecido por la persona que en ese momento conducía el vehículo ha tenido otros accidentes.

Dentro del término probatorio se presentarán nuevamente los argumentos tendientes al no reconocimiento de los mismos por parte de su Despacho y en su defecto considerar que no están llamados a prosperar, por la falta del elemento nexo causal y por la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez, que lo evidenciado hasta la fecha es la culpa exclusiva de un tercero. Motivo o razón suficiente para solicitar a su señoría la negación de los mismos.

Igualmente, me opongo a la indemnización cuantificada por daño moral, por cuanto no se ha probado el daño antijurídico, ni se ha establecido que en el actuar de las entidades judiciales haya dolo o culpa grave, al contrario la FGN obró en cumplimiento del deber legal y constitucional. Además estas sumas desbordan los lineamientos de la Sentencia de Unificación emitida por el Consejo de Estado en materia de indemnización por daños o perjuicios morales. Además que el proceso se encuentra ACTIVO, es decir, no se tiene certeza jurídica al no haber fallo en contra de la aquí indiciada en materia penal, o que se haya precluido la investigación en virtud de las causales establecidas en el artículo 332 del Estatuto Procesal Penal o que se le haya absuelta en sentencia penal.

M.1. OBJECION A LOS PERJUICIOS MATERIALES.-

Respecto a la cuantificación de los **daños materiales** supuestamente ocasionados a la parte actora a **TÍTULO DE DAÑO EMERGENTE**, víctima directa la suma de \$50.000.000.

Lucro Cesante la suma de \$0 pesos moneda legal colombiana. Por correspondiente al costo de los transportes que ha tenido que asumir para su movilidad.

Se tienen ínfimas pruebas y la llamada a responder en caso de condena de alguna de las entidades demandadas, sería la compañía aseguradora del Ente Territorial como tomador, es decir, la compañía está llamada a que responda en cuanto al llamamiento en garantía que se tiene en este proceso contencioso por reparación directa.

Igualmente me opongo, toda vez que las pretensiones deben ser claras, precisas y estar cuantificadas en el libelo demandatorio desde el agotamiento del requisito de procedibilidad. En caso contrario, no pueden entrarse a demandar los supuestos facticos petitorios de los cuales no se agotó el requisito de procedibilidad que ordena la norma procesal administrativa.

M.2. A LOS HECHOS:

Se determinará del respectivo cotejo probatorio. A lo cual solicito tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación - Seccional Cauca, en materia de vehículos incautados dispone de un **Parqueadero que se encuentra ubicado en la Vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán**, al cual ingresan los automotores y otro tipo de bienes rodantes previo el lleno de los requisitos de ley.

Una vez ingresan a dicho parqueadero previo inventario del bien, se expide el Acta respectiva y sólo así queda bajo la guarda y custodia de la entidad Fiscalía.

A los hechos presentados en la demanda no se cumple el requisito exigido en el artículo 167 del CGP., que taxativamente señala que **corresponde a las partes probar los supuestos jurídicos que ellas invocan**, por tanto, solicito a su Despacho que se verifiquen exhaustivamente todas y cada de las pretensiones solicitadas, frente a las actuaciones desplegadas en derecho por los Agentes de Tránsito, la Autoridad Judicial y la FGN, respectivamente, puesto que son circunstancias que se encuentran

íntimamente relacionados con los presupuestos facticos que dieron lugar al inicio del presente medio de control.

Al hecho 1º, presentado con la demanda, es CIERTO, habida cuenta que conforme al artículo 167 inciso final establecido en el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), se tiene como un hecho notorio, además de presentarse un Paro a Nivel Nacional. La Rectora del proceso deberá evaluar si la aquí demandante en calidad de Poseedora tiene legitimación en la Causa Por Activa, además de valorar la culpa exclusiva de la víctima.

Al hecho 2º, presentado con la demanda, PARCIALMENTE CIERTO, dado que en cuanto a la descripción y características esbozadas se tiene certeza, pero en cuanto a la PROPIETARIA del vehículo **no es CIERTO**, dado que Tenía la mera POSESIÓN, le faltó diligencia y cuidado para realizar el traspaso respectivo y registrarlo (MODO de adquirir los bienes), pues si bien es cierto se tenía el título contrato de compraventa no tenía la tradición de la cosa (modo) ello con certificación de la Tarjeta de propiedad escrita ante la oficina de tránsito respectiva. Igualmente el vehículo no estaba en la Secretaría de Tránsito municipal como lo da a entender, el Rodante se encontraba en el Centro de Diagnóstico Automotor a través de la figura de un contrato interadministrativo aquí prenombrado y en atención a la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

Además de lo anterior, por ser actuaciones propias de la jurisdicción penal se deben verificar con el expediente que se requerirá a la instancia judicial respectiva. Si el proceso está activo se solicitará certificación en tal sentido, a fin de guardar la reserva sumarial propia del Sistema Adversarial y de Partes.

En cuanto al valor comercial del vehículo que reclama deberá probarse, dado que no está probado el daño causado, por cuanto debe aplicarse la depreciación de los vehículos y tener en cuenta elementos como el estado del motor y el consumo de combustible, especialmente porque el auto tenía más de 5 años de antigüedad.

Al **hecho 3º**, presentado con la demanda, no se arrima prueba del Estado de incineración del Rodante, deberá probarse en el decurso del proceso, toda vez que para la fecha de los hechos del incendio el país estaba enfrentando una ola de protestas.

Al **hecho 4º**, presentado con la demanda se presume CIERTO, toda vez que en los diarios locales y nacionales como en las emisoras se informó al respecto, por lo tanto, no puede afirmarse que *"era de público conocimiento que los protestantes tenían la firme intención de incinerar los vehículos acopiados en el parqueadero Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán."*

Ahora conforme a la audiencia para la entrega provisional en cabeza del Juez Constitucional con Funciones de Control de Garantías se pudo probar que la aquí accionante no es la propietaria del vehículo, por lo cual negó la entrega provisional del vehículo, además de no probar en el presente medio de control reparación directa la propiedad a través de la Tarjeta de Propiedad.

Al **hecho 5º**, ES CIERTO. Según consta en el Contrato Interadministrativo No. 20161800013327 de fecha octubre 6 de 2016 celebrado entre el CDA y el Municipio de Popayán.

Al **hecho 6º**, presentado con la demanda. **No es CIERTO**, puesto que la Fiscalía debe realizar las investigaciones que reúnen características de delitos, como lo establece el artículo 250 Superior, igualmente el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal establece: *"La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente"*.

El Manual de Policía Judicial define la cadena de custodia como un sistema documentado que es aplicado a los elementos materiales probatorios y/o evidencia física por las personas responsables del manejo de los mismos, desde el momento en el cual se encuentran o aportan hasta su disposición final. (Fiscalía General de la Nación, 2005).

En general se puede argüir que la Fiscalía General de la Nación se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso de referencia, puesto que son circunstancias que precisamente se encuentran íntimamente relacionados con los hechos que dieron lugar al inicio del presente medio de control y por ende deben ser objeto de revisión por su Agencia Judicial; adicionalmente, estos deben ser debida y legamente probados en el desarrollo del mismo, estudiando si son justificantes de la iniciación de la presente reparación directa.

En síntesis frente a los hechos la Fiscalía General de la Nación se atiene a las resultas del proceso, previo debate probatorio, puesto que son circunstancias que se encuentran relacionadas con los hechos que dieron lugar al inicio del presente medio de control, igualmente contienen manifestaciones **subjetivas** del apoderado de la parte actora, y por ende deben ser objeto de revisión por su agencia judicial; Adicionalmente, estos deben ser debida y legalmente probados en el desarrollo del mismo, estudiando si son justificantes de la iniciación de la presente acción de reparación directa.

En el presente expediente no obra elemento material probatorio definitivo y concluyente que demuestren que el demandante debe ser acreedor a la indemnización pretendida, toda vez, que al estar directamente relacionado con el ámbito procesal penal, no le consta a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso, estableciéndose, sin embargo, desde ya, que, en cualquier caso, la mayoría de los hechos deberán ser desvirtuados en el curso del proceso contencioso administrativo, como quiera que a la parte accionante, le asiste la carga de la prueba.

Sea la oportunidad para informar que, existen diferentes clases de responsabilidad por las cuales puede ser investigada una persona: Responsabilidad Fiscal, Civil, Disciplinaria, Penal y Administrativa o Patrimonial, actuación que se realiza al tenor de las normas legales y siguiendo la ritualidad procesal propia.

Finalmente, se reitera que los actos de legalización de inmovilización, incautación, imputación y medida de aseguramiento así como la entrega del bien referido en la demanda son actuaciones que se predicen del Juez de Control de Garantías y no de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 250 Superior, desarrollado por la Ley 906 de 2004, tal como lo evidencian los documentos allegados con la acción de reparación directa, al tenor del artículo 100 del C.P.P. inciso final.

N. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITUD DE PRUEBAS PARA HACER VALER

Respetuosamente solicito tener con el valor legal las pruebas solicitadas y aportadas con la contestación de la demanda.

Sírvase Su Señoría, tener en cuenta lo siguiente:

N.1. FALTA DE PRUEBAS. No se aporta:

- N.1.** No se acredita o prueban los Daños morales o pretium doloris.
- N.2.** No se acredita o prueban los Daños materiales a título de daño emergente.
- N.3.** No se acredita o prueban los Daños materiales a título de lucro cesante.

Respecto de las pruebas solicitadas y aportadas se solicita tener con el valor legal que le corresponde, que sean analizadas en forma conjunta y a la luz de la Ley 906 de 2004, pues no está probado el daño

antijurídico, en caso contrario, estaríamos frente a una causal de exoneración por operancia de una causa ajena a la FGN., a saber: el hecho determinante de un tercero como fueron los facinerosos y desadaptados sociales que dañaron, destrozaron y generaron incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán.

Copia de la denuncia penal con radicado: 198076000637202000117.

N.4. SOLICITADAS:

Oficiar al Centro de Servicios judiciales, a fin de que se sirva enviar copia del proceso penal adelantado en contra de la Señora **NANCY ELENA BASTIDAS**, o identificado con la cédula de ciudadanía No. 29.543.516 expedida en Guacari de Valle del Cauca, incluidos los audios que reposan dentro de la citada investigación, para verificar la veracidad de los hechos contentivos de la demanda de reparación directa y probar que las actuaciones son desplegadas por la autoridad con facultades jurisdiccionales como el Juez de Control de Garantías.

Interrogatorio de parte a la Señora **NANCY ELENA BASTIDAS**, identificado con cédula No. 29.543.516 expedida en Guacari de Valle del Cauca, a fin de verificar las acciones tendientes a reclamar el vehículo y demás actos afectos a la demanda de reparación directa.

Oficiar a la Secretaria de Transito del Municipio de la Unión Valle –Secretaría de Movilidad para que certifique si la señora NANCY ELENA BASTIDAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.543.516 expedida en Guacari de Valle del Cauca.

O. EXCEPCIONES

Contra las pretensiones de la demandante propongo:

O.1. EXCEPCIÓNES PREVIAS:

O.1.1.- FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Es una excepción previa a la luz del estatuto instituido en el C.P.A.C.A. en su art.180-numeral 6°.

Lo anterior habida cuenta que el vehículo no entro a la Fiscalía General de la Nación, igualmente las actuaciones realizadas fue la Plena identificación del Vehículo con lo cual la información quedo consignada en el formato FPJ – 13, y se realizó en la fecha mayo 26 de 2021, igualmente las actuaciones realizadas corresponden al cumplimiento de un deber legal en atención al artículo 250 Superior y la ley 906 de 2004.

En conclusión, es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, pues la facultad jurisdiccional ya no se encuentra en cabeza de esta Entidad, sino que el titular de dicha facultad según la Ley 906 de 2004, está depositada en la Rama Judicial.

Contra las pretensiones de los demandantes propongo las excepciones previas a la luz de lo instituido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA., en su artículo 180, numeral 6°, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.

"ARTÍCULO 40. *Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:*

6. *Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver."*

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido entre la **legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material**. La legitimación material es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales.

La legitimación material en la causa exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óptica de las responsabilidades que legalmente corresponden al organismo demandado.

Así las cosas, en el caso en estudio se predica el fenómeno jurídico procesal de la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, si se parte del concepto de que ésta "*se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material*". (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997). Se arriba a esta conclusión, de acuerdo a los considerandos vertidos sobre la inoponibilidad de la relación sustancial examinadas con las facultades que el ordenamiento jurídico asigna a esta institución, pues si según la precitada sentencia la legitimación en la causa es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute, la misma Corporación sostiene que "... cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella." (Sentencia C-965 de 2003).

Finalmente, es de concluir que la **falta de legitimación** se encuentra consolidada en sentencias proferidas por el **Consejo de Estado**. Para la Fiscalía no se puede dejar de lado importantes antecedentes jurisprudenciales que en el marco de la Ley 906 de 2004 y en materia de medios de control de reparación directa la Fiscalía General de la Nación ha sido exonerada o eximida de responsabilidad patrimonial por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia; los que me permito traer a colación, con la solicitud respetuosa ante su Despacho, de que sean tenidos en cuenta en su análisis, rogando un pronunciamiento al respecto.

En este momento procesal, y dada la connotación delictual, era necesario y procedente imponer la medida de inmovilización. Obrar en forma contraria o contraviniendo las normas legales vigentes le generaría al Operador fiscal y al Juez de Control de Garantías una investigación de carácter penal y disciplinario por un presunto prevaricato por omisión.

Se recuerda además, que en este tipo de casos no es posible que una acción legítima del Estado genere un daño antijurídico, pues en caso contrario, donde quedaría la facultad oficiosa de investigación de delitos contra la vida e integridad personal. La respuesta debe ser, aplicar los actos urgentes con la inmediatez del caso y dejar a disposición de la autoridad competente al indiciado de autos, y al bien afecto al accidente de tránsito como forma de garantizar las garantías constitucionales del indiciado y de las víctimas.

Está probado que el bien no fue puesto a disposición de la FGN., pues no ingresó a los parqueaderos destinados para tal fin. Para tal efecto, se extrae copia del artículo 100 del C.P.P.

De los hechos citados se desprende además que, la FGN no fue quien entregó el bien al Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, como tampoco ejerció coacción o imposición frente al centro para que prestara el servicio de patios, ni ocasionó un daño antijurídico ya que el particular demandante

consintió en que el bien se dejara en el sitio indicado por la autoridad de tránsito, adscrita a la Policía Nacional, sin que se hubiese suscrito la correspondiente observación u oposición y con ello se sometió a las consecuencias desfavorables de su actuación u omisión.

Al contrario, desde la presentación y escrito de la demanda está probado que el bien se encontraba en custodia del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, por tanto, al presentarse el siniestro del bien correspondía a tal entidad responder por el vehículo objeto de reclamación, siempre y cuando se determine la debida diligencia y el cuidado por parte del propietario del rodante. Para tal evento el contratista debía constituir la respectiva póliza que ampara la actividad contractual tal como lo estableció el Convenio Interadministrativo No. 20161800013327, en las cláusulas 23 y 26 GARANTÍAS, de fecha 6 de octubre de 2016, firmado por el Municipio de Popayán y el CDAP. Artículo 100 Ley 906 de 2004.

"En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. "Resaltado es de mi autoría.

Brilla por su ausencia prueba alguna que demuestre la propiedad que alega la actora del vehículo incinerado, identificado con las placas KAV-976 de acuerdo con lo que dice el texto de la demanda, esa calidad que de acuerdo con el artículo 922⁴ del Código de Comercio, se demuestra con el registro del título de adquisición inscrito ante las oficinas de tránsito (**título y modo**), en concordancia con los decretos leyes 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y las leyes 53 de 1989 y 769 de 2002.

A falta del anterior registro, la calidad que la actora alega en el texto de la demanda también podría haberse demostrado con la **licencia de tránsito** por cuanto en ella se acredita la propiedad del vehículo.

Con el objetivo de demostrar lo anterior, aportaron las siguientes pruebas documentales:

Certificado de tradición del vehículo de placa KAV-976, emitida por la Secretaría de Movilidad de La Unión Valle;

Contrato de transacción a las voces del artículo 2469 Código Civil. Folios 5 y 6.

Formulario Solicitud de tramites Registro Nacional Automotor folio 7.

Contrato de compraventa / Mandato folios 8, 9, y 10.

⁴ CAPITULO IV OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Artículo 922. _Tradición de inmuebles y de automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
Parágrafo. De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Concordancia: 923, 927, 928; C. Civil 740 a 753, 756, 1849, 1880; C. de P. C. 417

Licencia de conducción anverso y reverso propietario CASTAÑO TAMAYO OSCAR. Cédula de ciudadanía No. 16.400.695 Expedida en Toro Valle Folio 11.

Revisión Tecno Mecánica – ambiental folio 12.

Documento de CASTAÑO TAMAYO OSCAR. Cédula de ciudadanía No. 16.400.695 Expedida en Toro Valle Folio 13.

Documento historial de vehículo para documento Cédula de ciudadanía No. 16.400.695, que corresponde a CASTAÑO TAMAYO OSCAR, folios 16 y 21.

No se tiene prueba del vehículo incinerado y que este haya estado en El Centro de Diagnóstico Automotor, se presume que estuvo ahí por la demanda aquí incoada.

Así mismo solicitó la práctica de las siguientes pruebas documentales: ordenar a la Secretaria de Movilidad de La unión Valle para que arrime copia auténtica del Certificado de Tradición del vehículo con las siguientes características:

Línea:	VAN
PLACAS:	KAV-796
MARCA:	CHANA
MODELO:	2009
COLOR:	Plata
MOTOR:	JL465Q5856AC055468
CHASIS:	LS4BAB3DX9G001906
SERVICIO:	PARTICULAR
LINEA:	STAR Van SC

P. LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE INMOVILIZACIÓN E INCAUTACIÓN

Conforme a las citas anteriores la medida al parecer no fue objeto de recurso, la cual fue estudiada en su momento por el Juez de Control de Garantías.

Así, las cosas, solicito a la autoridad judicial administrativa requerir copia de las piezas procesales a la autoridad jurisdiccional en materia penal, a fin de corroborar todos y cada uno de los dichos de la demanda administrativa, a efectos de tomar una decisión acorde a las políticas de Estado, a los Principios de Justicia y Equidad.

Q. HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

Está probado y fue un hecho notorio que los actos generadores del incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, en fecha mayo 28 de 2021, fueron ejecutados por grupos de vándalos y facinerosos, acciones delictivas totalmente ajenas a la entidad que represento, lo que deviene en ausencia de nexo causal entre el daño presentado y la actividad de la FGN.

R. INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO.

La demanda de reparación directa fue interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la investigación y acusación de delitos, desconociendo que la decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. Por tanto es importante que el Juzgado 5º Administrativo que conoce del asunto conforme el Litis consorcio necesario, como es vinculando a la Rama Judicial, a fin de determinar las actuaciones de la Autoridad Jurisdiccional del Estado frente al caso particular y concreto.

Tampoco se evidencia demanda contra los organizadores de las marchas como sería el Comando Nacional de Paro, pues mal puede derivarse responsabilidad estatal a la FGN cuando quienes causaron

los daños de incineración fueron terceros ajenos a la entidad que represento FGN, quienes deben ser denunciados, declarados responsables y llamados a responder por los bienes deteriorados, hurtados e incinerados.

S. FALTA DE COMPETENCIA DE FGN EN EL CONTROL DE ACTOS DE VANDALISMO.

No está probado que sea de resorte legal de la FGN., el control de actos de vandalismo, al contrario es una actividad que se presume de la Policía Nacional y del Municipio de Popayán, por ser la autoridad encargada de conceder permisos para adelantar marchar y controlar las protestas.

La primera autoridad policiva, *"tenía a su cargo actuar conforme a la finalidad de la disposición contenida en el Código Nacional de Policía referida precedentemente –planificación y mantenimiento de la seguridad-, ya que se justifica así la necesidad de darle aviso sobre la actividad programada. Por lo anterior, y en ausencia de prueba que demuestre lo contrario, la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad y, en particular, a los demandantes; en consecuencia, al no haberse prestado la seguridad correspondiente respecto de los manifestantes y de quienes se abstuvieron de participar en la jornada, en su calidad de demandado el distrito deberá ser condenado, dado que los demandantes no tenían el deber de soportar el perjuicio irrogado."* Sentencia nº 08001-23-31-000-2000-00213-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2014

Ahora bien la ley 599 de 2000, en su artículo **353A** estableció la Conducta Punible para la obstrucción de vías y como tal frente al Paro Nacional, el Alcalde Municipal de Popayán, Cauca, **debió restringir el permiso para llevar a cabo las manifestaciones presentadas**, lo cual para mejor ilustración se cita el artículo a su tenor literal:

Ley 599 de 2000. CÓDIGO PENAL

Artículo 353 A. Adicionado por el artículo 44, Ley 1453 de 2011. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.

T. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Contra las pretensiones del demandante propongo las siguientes EXCEPCIONES DE MÉRITO, no sin antes aclarar que las actuaciones de la fiscalía se han gestado en cumplimiento de un deber legal y además el proceso por Lesiones personales Culposas artículos 111 a 120 Código Penal Ley 599 de 2000, el cual se encuentra **ACTIVO**:

S.1.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL. Como se explicará a lo largo del presente documento, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró de conformidad con la obligación y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política; las disposiciones legales, dentro de éstas el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos, es pertinente entonces afirmar sin lugar a dudas que la actuación de la FGN no adoleció de conductas que pudieran viciar su validez y por ello no puede predicarse no estar ajustada a derecho, ni un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error.**

Dentro del plenario, y con ocasión del accidente de tránsito, NO HAY prueba de **comportamientos dilatorios o injustificados** en la investigación penal.

Ahora bien, lo relatado hasta este punto, es muestra y prueba del cumplimiento en estricto sentido del Deber Legal que le impone la Constitución Política de 1991 a la Fiscalía General de la Nación como órgano acusador por excelencia, siendo esta causa suficiente para que se rechace la pretensión del actor, consistente en endilgar a la entidad por mi representada un tipo de responsabilidad que genere por orden lógico una reparación administrativa avalada por su despacho.

S.2- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN o DEL DERECHO RECLAMADO:

Aplicable a la totalidad de las pretensiones con base en todo lo expuesto en esta contestación de demanda, lo cual me remito por celeridad y economía procesal.

S.3.- FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: Hace relación a todas las pretensiones y su argumentación se desprende del acápite de la oposición general y específica a las pretensiones, de los fundamentos de derecho, razones de defensa y de lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

S.4.- COBRO DE LO NO DEBIDO: No hay lugar al pago de las sumas que se pretenden por la parte actora conforme con lo expuesto en el acápite de oposición a las pretensiones, los fundamentos de derecho y razones de defensa y lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

U. COADYUVANCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.

Desde la contestación de la demanda coadyuvo el llamamiento en garantía que debieron hacer las entidades del Nivel territorial como es el Municipio de Popayán y el Centro de Diagnóstico Automotor, incluso del Orden Nacional como la Policía Nacional de Colombia, con ocasión de los hechos ocurridos con el rodante de Placas KAV-796, el día 28 de mayo de 2021, que se encontraba bajo guarda y custodia del contratista en virtud del Convenio Interadministrativo 20161800013327 de 6-10-2016. Que en el evento de haber superado el tope de indemnización se realice el directo llamamiento en garantía a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., por la Póliza número **3000103**, con vigencia técnica entre el 29-04-2021 al 28-06-2021 como Entidad Garante del Municipio de Popayán. Se allega copia de la póliza que cubre el período dentro del cual tuvieron ocurrencia los hechos. Lo anterior, a fin de que si se llegare a derivar algún tipo de responsabilidad por el vehículo en cita sea la compañía garante quien indemnice al demandante.

V. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO COMPLEMENTARIAS A LAS EXCEPCIONES

Como es bien sabido, el artículo 90 de la Carta Política determina que el Estado responderá patrimonialmente por daños, pero no cualquier clase de daños, en ella se señala expresamente que son los denominados **ANTI JURIDICOS**, agregando además "que le sean imputables", causados ya sea por acción o por omisión de las autoridades públicas. Así, la responsabilidad estatal está construida a partir de la existencia de un daño antijurídico y la consideración de antijuridicidad de la conducta o actividad del agente público, carente de título jurídico válido y que excede las obligaciones que debe soportar el individuo como integrante de la sociedad.

En el caso concreto, ninguno de los elementos de la responsabilidad está configurado, como pasa a explicarse:

U.1. INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO.-

Frente a los supuestos de responsabilidad - Falla en el servicio por pérdida posesión o tenencia del bien.

Características del vehículo:

Línea: VAN
PLACAS: KAV-796
MARCA: CHANA
MODELO: 2009
COLOR: Plata
MOTOR: JL465Q5856AC055468
CHASIS: LS4BAB3DX9G001906
SERVICIO: PARTICULAR
LINEA: STAR Van SC

Se tiene en los anexos de la demanda que la medida de inmovilización del vehículo automotor de Placas KAV-796 fue ejecutada por personal adscrito a la Policía Carretera -Nacional de Colombia, Comando Cauca.

Al respecto se informa que, las autoridades de tránsito que en el ejercicio de la función de policía judicial acuden al lugar del accidente e inmovilizan el vehículo, deben contar con un sitio o lugar en el cual ubiquen transitoriamente los rodantes para desarrollar los actos urgentes que la normatividad procesal penal ordena. Este lugar o sitio de parqueo provisional debe ser provisto por el organismo de tránsito correspondiente, pues es éste el que cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de tal labor (grúas y patios) y a quien la ley le asignó la función de realizar los actos urgentes en cumplimiento de sus actividades de policía judicial.

Como es bien sabido, para que se configure responsabilidad patrimonial de las entidades del Estado por sus acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio -entendiéndose este título de imputación como una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio, no personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración-, es necesario identificar o determinar claramente las obligaciones que desde el punto de vista legal, están llamadas a cumplir, constituyendo este aspecto la piedra angular para poder establecer si frente a un caso concreto una entidad tiene el deber jurídico de asumir patrimonialmente, las consecuencias de su actividad judicial, reguladas y permitidas por el ordenamiento jurídico.

Al analizarse el caso específico a la luz de los principios y criterios que informan la **falla del servicio**, se tiene que en el caso en litigio, **ésta no se presentó**, pues todo el proceso penal adelantado en su contra se ciñó a la ritualidad procesal consagrada en la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal vigente para la época y lugar de los hechos, por lo que la actuación de mi representada, la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, fue ajustada a Derecho.

Es necesario recordar que la jurisprudencia ha señalado que para que exista indemnización de perjuicios la falla ha de ser de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta de la administración sea considerada como anormalmente deficiente, lo cual fue manifestado en los siguientes términos por el Consejo de Estado en **Sentencia del 5 de agosto de 1994**, expediente 8485, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, así:

"...Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el estado con su obligación..."

"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad, que

teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente".

En punto de los requisitos necesarios para que se presente la Falla, el Consejo de Estado ha dicho:

"...Cuando el Estado en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "falta o falla del servicio", o mejor aún falta o falla de la administración, tratándose de simples actuaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y requiere:

- a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, la falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;*
- b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;*
- c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para que el daño sea indemnizable como que sea cierto, determinado o determinable, etc.;*
- d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.⁵*

En el caso que nos ocupa, no se incurrió en ninguna falla que tenga la virtud para que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda que se contesta por el presente memorial, ni para que se le impute a la Fiscalía General de la Nación perjuicio, por las siguientes razones:

La actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error.**

Es preciso recordar que la Fiscalía General de la Nación fue creada por inspiración constitucional, teniendo precisas funciones que cumplir, las que además se determinan entre otros ordenamientos en el estatuto procedimental penal. En el derecho colombiano, la regla general consiste en que las obligaciones a cargo de la administración, como consecuencia del principio constitucional contenido en el Artículo 6.-, deben ser determinadas, especificadas por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo corresponda ejecutar.

En este orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación, en el caso en estudio, obró de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 de la Carta.

W. ACLARACIÓN FRENTE A LA ESTIPULACIÓN DEL PARÁGRAFO 1º DEL ART.175 DEL C.P.A.C.A

En relación con la advertencia y/o exigibilidad que se imparte en el párrafo primero del artículo 175 del CPACA, aclaro que como quiera que se trata de un proceso penal que era de conocimiento de la Rama Judicial, el expediente procesal penal no se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación, sino de la Rama Judicial, la entidad que si estaría legitimada en la causa por pasiva en el presente asunto.

X. PETICIÓN

⁵ Bogotá D.E., 28 DE OCTUBRE DE 1976 Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado. Consejero Ponente: Dr. Jorge Valencia Arango. Referencia Exp 1482.

Sean las anteriores, razones suficientes por las que respetuosamente me permito solicitar se procure un fallo que deniegue todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda contra mi representada, y se declaren las excepciones propuestas.

En conclusión, no configurándose ningún daño antijurídico ni falla del servicio ni error judicial, por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, ruego al despacho proferir sentencia que absuelva de todo tipo de responsabilidad a mi representada.

Y. ANEXOS


Acompaño al presente memorial los siguientes:

1. Poder debidamente conferido al suscrito conforme al artículo 5 ley 2213 de 2022
2. Copia de la Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión de quien otorga poder
- 3.- Certificación del señor GUSTAVO ADOLFO ATEHORTÚA MOLINA, Administrador de Bienes, Popayan-Cauca, Subdirección de Apoyo a la Gestión- Regional Pacifico - Fiscalía General de la Nación.
- 4.- Formato de noticia criminal Delito Lesiones Culposas artículos 111 – 120 Código Penal Colombiano.

Z. NOTIFICACIONES PERSONALES Y COMUNICACIONES PROCESALES

Mi representada y el suscrito profesional en: Calle 3 No.2-76 Barrio La Pamba – Oficina Dirección de Asuntos Jurídicos FGN Popayán. Igualmente a través de los correos: para notificaciones judiciales: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; elier.castillo@fiscalia.gov.co

De la Honorable Juez,



ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS

C.C. 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao C.

T.P. 140.187 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Honorable Juez
Doctora GLORIA MILENA ROJAS PAREDES.
JUZGADO QUINTO (5º) ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
E. S. D.
Popayán Cauca

Ref.: EXCEPCIONES
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Proceso No.: 190013333005 2023 00133 00
Actor: NANCY ELENA RIVAS - OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRO

ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS, mayor, domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao, Cauca, Popayán Cauca, con Tarjeta Profesional número 99.529 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Nit. 800.152.783-2**, de conformidad con el poder que adjunto con sus respectivos anexos, con todo respeto y oportunamente, procedo por medio del presente escrito a presentar **EXCEPCIONES** a la demanda que concita el asunto *sub examine*, así:

A. OPORTUNIDAD

Presento escrito de **EXCEPCION PREVIA**, dentro del término establecido en el Artículo 201A de la ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 101 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012).

B. EXCEPCION(ES) PROPUESTA(S)

Contra las pretensiones del demandante propongo las **EXCEPCIONES PREVIAS**:

1.- FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

C. RAZONES Y HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTAN

Es una excepción previa a la luz del estatuto instituido en el C.P.A.C.A. en su art.180-numeral 6º.

Lo anterior habida cuenta que el vehículo no entro a la Fiscalía General de la Nación, igualmente las actuaciones realizadas fue la Plena identificación del Vehículo con lo cual la información quedo consignada en el formato FPJ – 13, y se realizó en la fecha mayo 26 de 2021, igualmente las actuaciones realizadas corresponden al cumplimiento de un deber legal en atención al artículo 250 Superior y la ley 906 de 2004.

En conclusión, es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, pues la facultad jurisdiccional ya no se encuentra en cabeza de esta Entidad, sino que el titular de dicha facultad según la Ley 906 de 2004, está depositada en la Rama Judicial.

Contra las pretensiones de los demandantes propongo las excepciones previas a la luz de lo instituido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA., en su artículo 180, numeral 6º, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.

"ARTÍCULO 40. *Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:*

6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver."

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido entre la **legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material**. La legitimación material es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales.

La legitimación material en la causa exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óptica de las responsabilidades que legalmente corresponden al organismo demandado.

Así las cosas, en el caso en estudio se predica el fenómeno jurídico procesal de la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, si se parte del concepto de que ésta *"se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material"*. (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997). Se arriba a esta conclusión, de acuerdo a los considerandos vertidos sobre la inoponibilidad de la relación sustancial examinadas con las facultades que el ordenamiento jurídico asigna a esta institución, pues si según la precitada sentencia la legitimación en la causa es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute, la misma Corporación sostiene que "... cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella." (Sentencia C-965 de 2003).

Finalmente, es de concluir que la **falta de legitimación** se encuentra consolidada en sentencias proferidas por el **Consejo de Estado**. Para la Fiscalía no se puede dejar de lado importantes antecedentes jurisprudenciales que en el marco de la Ley 906 de 2004 y en materia de medios de control de reparación directa la Fiscalía General de la Nación ha sido exonerada o eximida de responsabilidad patrimonial por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia; los que me permito traer a colación, con la solicitud respetuosa ante su Despacho, de que sean tenidos en cuenta en su análisis, rogando un pronunciamiento al respecto.

En este momento procesal, y dada la connotación delictual, era necesario y procedente imponer la medida de inmovilización. Obrar en forma contraria o contraviniendo las normas legales vigentes le generaría al Operador fiscal y al Juez de Control de Garantías una investigación de carácter penal y disciplinario por un presunto prevaricato por omisión.

Se recuerda además, que en este tipo de casos no es posible que una acción legítima del Estado genere un daño antijurídico, pues en caso contrario, donde quedaría la facultad oficiosa de investigación de delitos contra la vida e integridad personal. La respuesta debe ser, aplicar los actos urgentes con la inmediatez del caso y dejar a disposición de la autoridad competente al indiciado de autos, y al bien afecto al accidente de tránsito como forma de garantizar las garantías constitucionales del indiciado y de las víctimas.

Está probado que el bien no fue puesto a disposición de la FGN., pues no ingresó a los parqueaderos destinados para tal fin. Para tal efecto, se extrae copia del artículo 100 del C.P.P.

De los hechos citados se desprende además que, la FGN no fue quien entregó el bien al Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, como tampoco ejerció coacción o imposición frente al centro para que prestara el servicio de patios, ni ocasionó un daño antijurídico ya que el particular demandante consintió en que el bien se dejara en el sitio indicado por la autoridad de tránsito, adscrita a la Policía Nacional, sin que se hubiese suscrito la correspondiente observación u oposición y con ello se sometió a las consecuencias desfavorables de su actuación u omisión.

Al contrario, desde la presentación y escrito de la demanda está probado que el bien se encontraba en custodia del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, por tanto, al presentarse el siniestro del bien correspondía a tal entidad responder por el vehículo objeto de reclamación, siempre y cuando se determine la debida diligencia y el cuidado por parte del propietario del rodante. Para tal evento el contratista debía constituir la respectiva póliza que ampara la actividad contractual tal como lo estableció el Convenio Interadministrativo No. 20161800013327, en las cláusulas 23 y 26 GARANTÍAS, de fecha 6 de octubre de 2016, firmado por el Municipio de Popayán y el CDAP. Artículo 100 Ley 906 de 2004.

"En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. "Resaltado es de mi autoría.

Brilla por su ausencia prueba alguna que demuestre la propiedad que alega la actora del vehículo incinerado, identificado con las placas KAV-976 de acuerdo con lo que dice el texto de la demanda, esa calidad que de acuerdo con el artículo 922¹ del Código de Comercio, se demuestra con el registro del título de adquisición inscrito ante las oficinas de tránsito (**título y modo**), en concordancia con los decretos leyes 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y las leyes 53 de 1989 y 769 de 2002.

A falta del anterior registro, la calidad que la actora alega en el texto de la demanda también podría haberse demostrado con la **licencia de tránsito** por cuanto en ella se acredita la propiedad del vehículo.

Con el objetivo de demostrar lo anterior, aportaron las siguientes pruebas documentales:

Certificado de tradición del vehículo de placa KAV-976, emitida por la Secretaría de Movilidad de La Unión Valle;

Contrato de transacción a las voces del artículo 2469 Código Civil. Folios 5 y 6.

Formulario Solicitud de tramites Registro Nacional Automotor folio 7.

Contrato de compraventa / Mandato folios 8, 9, y 10.

Licencia de conducción anverso y reverso propietario CASTAÑO TAMAYO OSCAR. Cédula de ciudadanía No. 16.400.695 Expedida en Toro Valle Folio 11.

Revisión Tecno Mecánica – ambiental folio 12.

¹ CAPITULO IV OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Artículo 922. _Tradición de inmuebles y de automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
Parágrafo. De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Concordancia: 923, 927, 928; C. Civil 740 a 753, 756, 1849, 1880; C. de P. C. 417

Documento de CASTAÑO TAMAYO OSCAR. Cédula de ciudadanía No. 16.400.695 Expedida en Toro Valle Folio 13.

Documento historial de vehículo para documento Cédula de ciudadanía No. 16.400.695, que corresponde a CASTAÑO TAMAYO OSCAR, folios 16 y 21.

No se tiene prueba del vehículo incinerado y que este haya estado en El Centro de Diagnóstico Automotor, se presume que estuvo ahí por la demanda aquí incoada.

Así mismo solicitó la práctica de las siguientes pruebas documentales: ordenar a la Secretaria de Movilidad de La unión Valle para que arrime copia auténtica del Certificado de Tradición del vehículo con las siguientes características:

Línea:	VAN
PLACAS:	KAV-796
MARCA:	CHANA
MODELO:	2009
COLOR:	Plata
MOTOR:	JL465Q5856AC055468
CHASIS:	LS4BAB3DX9G001906
SERVICIO:	PARTICULAR
LINEA:	STAR Van SC

A. LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE INMOVILIZACIÓN E INCAUTACIÓN

Conforme a las citas anteriores la medida al parecer no fue objeto de recurso, la cual fue estudiada en su momento por el Juez de Control de Garantías.

Así, las cosas, solicito a la autoridad judicial administrativa requerir copia de las piezas procesales a la autoridad jurisdiccional en materia penal, a fin de corroborar todos y cada uno de los dichos de la demanda administrativa, a efectos de tomar una decisión acorde a las políticas de Estado, a los Principios de Justicia y Equidad.

B. HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

Está probado y fue un hecho notorio que los actos generadores del incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, en fecha mayo 28 de 2021, fueron ejecutados por grupos de vándalos y facinerosos, acciones delictivas totalmente ajenas a la entidad que represento, lo que deviene en ausencia de nexo causal entre el daño presentado y la actividad de la FGN.

C. INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO.

La demanda de reparación directa fue interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la investigación y acusación de delitos, desconociendo que la decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. Por tanto es importante que el Juzgado 5º Administrativo que conoce del asunto conforme el Litis consorcio necesario, como es vinculando a la Rama Judicial, a fin de determinar las actuaciones de la Autoridad Jurisdiccional del Estado frente al caso particular y concreto.

Tampoco se evidencia demanda contra los organizadores de las marchas como sería el Comando Nacional de Paro, pues mal puede derivarse responsabilidad estatal a la FGN cuando quienes causaron los daños de incineración fueron terceros ajenos a la entidad que represento FGN, quienes deben ser denunciados, declarados responsables y llamados a responder por los bienes deteriorados, hurtados e incinerados.

D. FALTA DE COMPETENCIA DE FGN EN EL CONTROL DE ACTOS DE VANDALISMO.

No está probado que sea de resorte legal de la FGN., el control de actos de vandalismo, al contrario es una actividad que se presume de la Policía Nacional y del Municipio de Popayán, por ser la autoridad encargada de conceder permisos para adelantar marchar y controlar las protestas.

La primera autoridad policiva, *"tenía a su cargo actuar conforme a la finalidad de la disposición contenida en el Código Nacional de Policía referida precedentemente –planificación y mantenimiento de la seguridad-, ya que se justifica así la necesidad de darle aviso sobre la actividad programada. Por lo anterior, y en ausencia de prueba que demuestre lo contrario, la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad y, en particular, a los demandantes; en consecuencia, al no haberse prestado la seguridad correspondiente respecto de los manifestantes y de quienes se abstuvieron de participar en la jornada, en su calidad de demandado el distrito deberá ser condenado, dado que los demandantes no tenían el deber de soportar el perjuicio irrogado."* Sentencia nº 08001-23-31-000-2000-00213-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2014

Ahora bien la ley 599 de 2000, en su artículo **353A** estableció la Conducta Punible para la obstrucción de vías y como tal frente al Paro Nacional, el Alcalde Municipal de Popayán, Cauca, **debió restringir el permiso para llevar a cabo las manifestaciones presentadas**, lo cual para mejor ilustración se cita el artículo a su tenor literal:

Ley 599 de 2000. CÓDIGO PENAL

Artículo 353 A. Adicionado por el artículo 44, Ley 1453 de 2011. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.

E. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Contra las pretensiones del demandante propongo las siguientes EXCEPCIONES DE MÉRITO, no sin antes aclarar que las actuaciones de la fiscalía se han gestado en cumplimiento de un deber legal y además el proceso por Lesiones personales Culposas artículos 111 a 120 Código Penal Ley 599 de 2000, el cual se encuentra **ACTIVO**:

S.1.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL. Como se explicará a lo largo del presente documento, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró de conformidad con la obligación y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política; las disposiciones legales, dentro de éstas el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos, es pertinente entonces afirmar sin lugar a dudas que la actuación de la FGN no adoleció de conductas que pudieran viciar su validez y por ello no puede predicarse no estar ajustada a derecho, ni un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error.**

Dentro del plenario, y con ocasión del accidente de tránsito, NO HAY prueba de **comportamientos dilatorios o injustificados** en la investigación penal.

Ahora bien, lo relatado hasta este punto, es muestra y prueba del cumplimiento en estricto sentido del Deber Legal que le impone la Constitución Política de 1991 a la Fiscalía General de la Nación como órgano acusador por excelencia, siendo esta causa suficiente para que se rechace la pretensión del actor, consistente en endilgar a la entidad por mi representada un tipo de responsabilidad que genere por orden lógico una reparación administrativa avalada por su despacho.

S.2.- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN o DEL DERECHO RECLAMADO:

Aplicable a la totalidad de las pretensiones con base en todo lo expuesto en esta contestación de demanda, lo cual me remito por celeridad y economía procesal.

S.3.- FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: Hace relación a todas las pretensiones y su argumentación se desprende del acápite de la oposición general y específica a las pretensiones, de los fundamentos de derecho, razones de defensa y de lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

S.4.- COBRO DE LO NO DEBIDO: No hay lugar al pago de las sumas que se pretenden por la parte actora conforme con lo expuesto en el acápite de oposición a las pretensiones, los fundamentos de derecho y razones de defensa y lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

A. PRUEBAS

Ruego se tengan como tales, las aportadas con la demanda y la contestación y que reposan en el proveído del expediente, como también la(s) solicitada(s) en la misma contestación por parte de esta entidad.

B. PETICIÓN

Sean las anteriores, razones suficientes por las que respetuosamente me permito solicitar se procure un fallo que deniegue todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda contra mi representada.

En conclusión, no configurándose ningún daño antijurídico ni falla del servicio de la Fiscalía General de la Nación, ruego al despacho proferir sentencia que absuelva de todo tipo de responsabilidad a mi representada.

C. NOTIFICACIONES PERSONALES Y COMUNICACIONES PROCESALES

Mi representada y el suscrito profesional, recibiremos en: Calle 3 No.2-76 Barrio La Pamba, Popayán, Dirección de Asuntos Jurídicos Cauca de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente a través de los correos: para notificaciones judiciales: jur.novedades@fiscalia.gov.co; elier.castillo@fiscalia.gov.co

De la Honorable Juez,



ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS

C.C. 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao C.

T.P. 140.187 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura.

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Nivel Central

DIAGONAL 22 B NUMERO 52-01 BUNKER – CIUDAD SALITRE

TELÉFONO (1) 5702000 Ext. 2282 - BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

jur.novedades@fiscalia.gov.co – elier.castillo@fiscalia.gov.co

www.fiscalia.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUJICPAL
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
TIMBÍO CAUCA

198074089002

ACTA DE AUDIENCIA

CUI. 1980760006372020-00177-00 N.I 048

TIMBÍO, CAUCA, tres (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

HORA INICIO: 11:47 AM

HORA FINAL: 12:23 PM

JUEZ.	MARÍA ELENA MUÑOZ
M.PÚBLICO.	AFRANIA MARGARITA MUÑOZ Q.
FISCAL.	DR. JHON FERNANDO SANCHEZ PARDO FISCALÍA: 02 LOCAL CARRERA 22 NO.18-43 TELÉFONO: 8279415
SOLICITANTE.	NANCY ELENA BASTIDAS C.C29.543.516 SAN JUAN BAUTISTA CALLE 7 6-67 B/ EL DORADO NANCHYS0421@GMAIL.COM TELÉFONO:314 6008886
DELITO.	LESIONES PERSONALES CULPOSAS

SOLICITUD	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA PROVISIONAL DE VEHICULO	X		Se niega la entrega provisional del vehículo de placas KAV916.

OBSERVACIONES: Hoy 15 de febrero de 2021, estando dentro de las horas de las 11:47 AM La suscrita Juez del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Garantías de Timbío Cauca, declara instalada la presente AUDIENCIA VIRTUAL DE ENTREGA PROVISIONAL DE VEHICULO, solicitada por la señora NANCY ELENA BASTIDAS, identificada con la C.C 29.543.516 de San Juan Bautista de Guacarí dentro de las diligencias radicadas CUI. 1980760006372020-00177-00 N.I 048, por el delito de las lesiones PERSONALES CULPOSAS.

Verificadas las partes, se le concede el uso de la palabra a la señora NANCY ELENA BASTIDAS, propietaria del vehículo en mención quien de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 100 de CPP solicita entrega provisional del vehículo de placas KAV916, marca CHANA, color PLATA, servicio PARTICULAR, modelo 2009, numero de motor JL465Q5856AC055468, numero de chasis LS4BAB3DX9G001906. La señora Nancy Elena Bastidas presenta su argumentación jurídica basada en que solicita la entrega provisional del vehículo en calidad de propietaria, sin embargo aclara que el vehículo se encuentra actualmente a nombre de otra persona que fue quien se lo vendió días antes del accidente de tránsito, manifiesta tener una carta abierta que certifica que es la poseedora en este momento del vehículo, presenta también el SOAT, el certificado de tradición actualizado, un poder, carta abierta del ministerio, cedula de ciudadanía del anterior dueño el señor ROBINSON ANTONIO FRANCO y contrato de compraventa del vehículo, manifiesta pues que los ya mencionados documentos son el soporte que tiene para garantizar la legitimidad del proceso de legalización del vehículo, realiza el traslado de los ya mencionados elementos materiales probatorios a la Fiscalía. El señor fiscal hace un recuento de los hechos acaecidos el día 24 de junio de 2020 siendo aproximadamente las 5:30 PM, el cual tuvo como acontecimiento el choque de dos vehículos, como elemento material número 1 se ubicó fuera de la calzada un vehículo tipo campero de placas TER 162 conducido por el señor FRANKLIN YIMAR HOYOS residente en la vereda las Guacas y como elemento número 2 se ubicó a un costado en la calzada una camioneta de placas KAV916 conducido por el señor JAIME LONDOÑO HERNANDEZ residente en el municipio de Guacarí quien sufre traumatismos múltiples, trauma craneo encefálico severo y trauma cerrado de tórax; en este orden de ideas dentro de lo emp reposa un informe rendida por el profesional de gestión dos el señor JOSE RAUL MANRIQUE TRIANA experto en automotores, quien menciona en su interpretación de resultados de lo expuesto anteriormente que el vehículo automotor elemento de estudio al momento de la diligencia queda identificado técnicamente con el serial chasis, numero de plaquetas serial y el número de motor, se informa que el rango número de la placa KAV916 al momento se encuentra en la secretaria de transito de la Unión Nariño y las características de elaboración están acordes a las exigidas por el ministerio de transporte, dicho informe sustenta de que las improntas, serie de chasis y plaqueta serial son originales de fábrica, no han sido alteradas y corresponden estos datos al certificado de tradición que aporta la solicitante; si bien es cierto la solicitante aporta el certificado de tradición pero se observa que se encuentra a nombre de otra persona quien responde al nombre de OSCAR CASTAÑO TAMAYO identificado con el número de cedula 16.400.695 de Toro (Valle), quien a su vez le vende el vehículo al señor ROBINSON ANTONIO FRANCO SÁNCHEZ identificado con el número de cedula 6.526.821 del Dovio (Valle) y quien le vende a la señora NANCY ELENA BASTIDAS, el cual le fue comprado al señor Franco 8 días antes del accidente. Si bien el artículo 100 del CPP habla acerca del poseedor o tenedor legítimo salvo que se haya decretado su embargo o secuestro en este evento este delegado se OPONDRÁ a la solicitud provisional de este vehículo teniendo en cuenta que así la tradición del vehículo se encuentre a simple vista clara, se ha vendido dicho vehículo en dos oportunidades, existen unos documentos que están en blanco obrando como cartas abiertas y sería oportuno que en este tipo de solicitud se presente una autorización expedida por parte de la persona que reposa en el certificado de tradición confiriéndole el poder a la señora

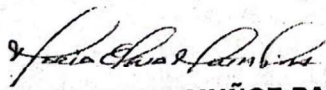
NANCY ELENA BASTIDAS de solicitar la entrega provisional de dicho vehículo, mencionado lo anterior el señor Fiscal no coadyuva la solicitud de entrega provisional de dicho vehículo hasta tanto no haya un oficio por parte del propietario legítimo de este vehículo para tal solicitud.

DECISIÓN: la señora juez argumenta su decisión después de escuchadas las intervenciones de la señora NANCY ELENA BASTIDAS en calidad de solicitante y del DR. JHON FERNANDO PARDO actuando como fiscal, la primera de ella solicitando la entrega provisional de un vehículo en calidad de poseedora, involucrado dentro de la investigación por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS bajo el radicado No. CUI 1980760006372020-00177-00 Con el fin de obtener de este despacho la autorización para recibir este vehículo de manera provisional, aportando una serie de emp que tras verificados los mismos, se encuentra que la señora NANCY ELENA BASTIDAS hace entrega de una licencia de conducción a nombre del señor JAIME LONDOÑO HERNANDEZ, fotocopia de cedula de ciudadanía a nombre del señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO, fotocopia de cedula de ciudadanía a nombre del señor ROBINSON ANTONIO FRANCO, licencia de tránsito a nombre de ROBINSON ANTONIO FRANCO, formulario de solicitud de trámite de Registro Nacional de Automotor suscrito por el señor ROBINSON ANTONIO FRANCO documento que se encuentra abierto sin indicar a nombre de quien se hará el traspaso, contrato de compraventa del vehículo automotor suscrito por el señor ROBINSON ANTONIO FRANCO sin diligenciar ninguna de las partes que identifican el vehículo a vender tales como placa, motor, chasis, modelo, marca, serie, color o capacidad, contrato de mandato suscrito por el señor ROBINSON ANTONIO FRANCO igualmente con todas las partes de las indicaciones de a quién se transfiere la propiedad en blanco, documento de solicitud de trámites ante el registro automotor firmado por el señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO en blanco en los espacios que deben detallar el vehículo y la persona, contrato de compraventa en donde no dan indicaciones de quien es el comprador ni el vendedor, ni identificaciones, ni características del vehículo, poder dirigido a la secretaria de tránsito y transporte sin indicar la ciudad y firmado por el señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO igualmente en blanco sin especificaciones del vehículo, certificado de tradición vigente al día 15 de febrero de 2021 que figura a nombre del señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO expedido por la secretaria de Transito de la Unión Valle del vehículo de placas **KAV916** Y experticio técnico relacionado a dicho vehículo. De conformidad con el artículo 100 del CPP establece una calificación para las personas que pueden acceder a solicitar la entrega provisional de un vehículo tales como son el propietario, poseedor o tenedor legítimo, en cualquiera de estas calidades se debe probar ante el Juez de control de garantías que está legitimada la causa para hacer esta solicitud, en el caso que nos ocupa no se encuentra ninguna prueba que garantice la calidad de propietaria ni de poseedora de la señora NANCY ELENA BASTIDAS; por cuanto los citados emp no conllevan al convencimiento, si bien es cierto obra el principio de buena fe en estas circunstancias, sin embargo en los procesos judiciales todo debe estar debidamente probada y como tal hay muchas formas de que sea probada y en este caso no ha sido realizado por ninguna de ellas; el contrato de compraventa que la señora NANCY ELENA BASTIDAS presenta como prueba de la posesión está totalmente en blanco, solo ostenta la firma de la persona que se suscribe como OSCAR CASTAÑO TAMAYO, así mismo los demás documentos dirigidos a la secretaria de tránsito y en los demás documentos ninguno señala a la señora NANCY ELENA BASTIDAS como

la posible en un futuro propietaria y que acredite en este momento que es poseedora del vehículo en mención. Estos documentos no dan fe de dicha situación es por ello que este despacho no puede atender a favor de la señora NANCY ELENA BASTIDAS hasta que ella no verifique su calidad de Propietaria o poseedora.

RESUELVE: PRIMERO: NO ACCEDER A LA ENTREGA PROVISIONAL del vehículo de placas KAV916, marca CHANA, color PLATA, servicio PARTICULAR, modelo 2009, numero de motor JL465Q5856AC055468, numero de chasis LS4BAB3DX9G001906 de propiedad actualmente del señor OSCAR CASTAÑO TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía No.16.400.695 de Toro (Valle); sin embargo la señora NANCY ELENA BASTIDAS podrá presentar una nueva solicitud para la entrega provisional del vehículo referenciado siempre y cuando presente todos los documentos completos y garantice de que es la legitima propietaria del vehículo. **SEGUNDO:** ORDENAR el archivo definitivo de la presenta audiencia ejecutoriada. Se ordena la grabación de audio en CD y realizar la respectiva acta de audiencia. **TERCERO:** esta decisión se notifica en estrados y contra la misma proceden los recursos de la ley. SIN RECURSOS. Por tanto, queda debidamente notificado en estrados, ejecutoriada y en firme.

La Juez,


MARIA ELENA MUÑOZ PAZ
JUEZ



Buen día

Respetuosamente se remite(n) 1 poder (s), de acuerdo a lo definido en el Artículo **5** de la **LEY 2213 DE 2022**, que establece:

"ARTÍCULO 5°. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados." Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales."

Cordialmente,

poderesDAJ@fiscalia.gov.co

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Señor

**JUEZ 5º ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYAN
E.S.D.**

MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE:	NANCY ELENA BASTIDAS
RADICADO:	19001333300520230013300

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO, domiciliada en la Ciudad de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.881.383 de Arjona – Bolívar, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, debidamente designada mediante oficio 20221500004773 del 30 de marzo de 2022, en los términos de la delegación efectuada por el Señor **FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN**, mediante el artículo décimo de la Resolución N° 0-0259 del 29 de marzo de 2022, documentos que anexo al presente escrito, atentamente manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **ELIER ERNEY CASTILLO**



CÁRDENAS, abogado en ejercicio, portador de la C.C. No. 10.480.196 de Santander de Quilichao, T.P. No. 140.187 del C.S.J., para que represente a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** en el proceso de la referencia.

El doctor **ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS** queda investido de las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso y en especial para, sustituir conciliar total o parcialmente, recibir, presentar recursos ordinarios y extraordinarios y en general para adelantar las diligencias tendientes al cabal desarrollo del presente mandato.

Solicito respetuosamente se reconozca personería al Doctor **ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS**, en los términos y para los fines que confiere el presente poder.

El correo institucional del abogado es elier.castillo@fiscalia.gov.co, el correo electrónico para notificaciones judiciales, comunicaciones, citaciones, traslados o cualquier otra actuación que se realice a través de un mensaje de datos es jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

De Usted,

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO

Coordinadora Unidad de Defensa Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos

Acepto:

ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS

C. C. No. 10.480.196 de Santander de Quilichao
T. P. No. 140.187 del C. S. J.

Elaboró Rocio Rojas R.-
1-9-23



Radicado No. 20181500002733
Oficio No. DAJ-10400-
04/04/2018
Página 1 de 1

Bogotá D.C., 04 de abril de 2018

Doctora
SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Dirección de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación
Ciudad

ASUNTO: RATIFICACIÓN DE FUNCIONES COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DEFENSA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Respetada doctora Sonia,

Con ocasión de la expedición de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación "establece la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos", y con el fin de dar continuidad a la función de coordinación que viene desempeñando, de manera atenta me permito ratificar su designación como Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Las funciones asignadas a la mencionada Unidad se encuentran consagradas en el artículo 3° de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación estableció la organización interna de esta Dirección.

Cordialmente,


MYRIAM STELLA ORTIZ QUINTERO
Directora de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación

Proyectó: Johanna Pinto García 



RESOLUCIÓN No. 00863

18 MAR. 2016

“Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad”

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN,

En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 251, numeral 2°, de la Constitución Política y en los artículos 4°, numeral 22, del Decreto Ley 016 de 2014 y 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia constitucional y legal para nombrar y remover a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el numeral 22 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014 faculta al Fiscal General de la Nación para nombrar y remover al Vicefiscal General de la Nación y demás servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el Decreto Ley 017 de 2014 define los niveles jerárquicos, modifica la nomenclatura y establece las equivalencias y requisitos generales para los empleos de la Entidad.

Que la resolución 0-0470 del 2 de abril de 2014, modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los Empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y establece otras disposiciones.

Que el párrafo 1 del artículo 2° del Decreto Ley 018 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación distribuirá los cargos de las plantas en cada una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014, señala las clases de nombramientos al interior de la entidad, disponiendo en el numeral 3 como uno de ellos la provisionalidad *“Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal cuando el titular no este percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa. // Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección”*.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la resolución 0-0787 del 9 de abril de 2014, el Despacho del Fiscal General de la Nación, verificó que la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que de acuerdo con el Decreto Ley 018 de 2014, el empleo en el que se nombra a la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, pertenece a la planta global del área Administrativa y será ubicado en la Dirección Jurídica, por necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Nombrar en provisionalidad en el cargo de **PROFESIONAL EXPERTO** en la Dirección Jurídica a la doctora ****SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, con cédula de ciudadanía No. **30.881.383**.

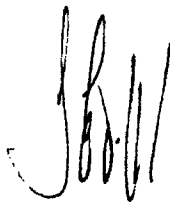
ARTÍCULO 2º. El nombramiento deberá ser comunicado a la interesada por el Departamento de Administración de Personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo, para que, dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la comunicación, manifieste su decisión, y deberá tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación.

ARTÍCULO 3º. La nombrada tomará posesión del cargo ante el **Subdirector de Talento Humano o el Jefe del Departamento de Administración de Personal**, acreditando que reúne los requisitos exigidos para tal efecto.



ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **18 MAR. 2016**



EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Angela Viviana Mendoza Barbosa		16 de marzo de 2016
Revisó:	Shelly Alexandra Duarte Rojas		16 de marzo de 2016
Aprobó:	Rocio del Pilar Forero Garzón		16 de marzo de 2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			



005542

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 5 de Abril de 2016, se presentó en el Departamento de Administración de Personal de la Subdirección Nacional de Talento Humano, la señora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 30.881.383**, con el fin de tomar posesión del cargo de **PROFESIONAL EXPERTO**, en la Dirección Jurídica, nombramiento efectuado mediante Resolución **No. 0-0863** del 18 de marzo de 2016.

Prestó el juramento de rigor conforme a los preceptos legales, por cuya gravedad se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes que el cargo le impone. Igualmente, se le enteró del artículo 60. de la Ley 190 de 1995.

Para esta posesión se presentó la siguiente documentación:

- Carta de Aceptación
- Certificado Antecedentes de Policía Nacional
- Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría
- Certificado de Deudores Morosos
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados
- Copia de la Tarjeta Profesional

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

NELBI YOLANDA ARENAS HERREÑO

Jefe Departamento Administración de Personal (E)

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Posesionada

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE LA COPIA
QUE REPOSA EN EL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DRL/ Leticia Beltrán R.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DIAGONAL 228 (AVDA. LOS CARLOS GALÁN) No. 52-01 BLOQUE C PISO 4 BOGOTÁ

CONMUTADOR 5702000 - 4149000 Exts. 2064

WWW.FISCALIA.GOV.CO



Radicado No. 20181500002733
Oficio No. DAJ-10400-
04/04/2018
Página 1 de 1

Bogotá D.C., 04 de abril de 2018

Doctora
SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Dirección de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación
Ciudad

ASUNTO: RATIFICACIÓN DE FUNCIONES COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DEFENSA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Respetada doctora Sonia,

Con ocasión de la expedición de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación "establece la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos", y con el fin de dar continuidad a la función de coordinación que viene desempeñando, de manera atenta me permito ratificar su designación como Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Las funciones asignadas a la mencionada Unidad se encuentran consagradas en el artículo 3° de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación estableció la organización interna de esta Dirección.

Cordialmente,


MYRIAM STELLA ORTIZ QUINTERO
Directora de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación

Proyectó: Johanna Pinto García 



RESOLUCIÓN No. 00863

18 MAR. 2016

“Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad”

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN,

En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 251, numeral 2°, de la Constitución Política y en los artículos 4°, numeral 22, del Decreto Ley 016 de 2014 y 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia constitucional y legal para nombrar y remover a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el numeral 22 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014 faculta al Fiscal General de la Nación para nombrar y remover al Vicefiscal General de la Nación y demás servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el Decreto Ley 017 de 2014 define los niveles jerárquicos, modifica la nomenclatura y establece las equivalencias y requisitos generales para los empleos de la Entidad.

Que la resolución 0-0470 del 2 de abril de 2014, modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los Empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y establece otras disposiciones.

Que el párrafo 1 del artículo 2° del Decreto Ley 018 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación distribuirá los cargos de las plantas en cada una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014, señala las clases de nombramientos al interior de la entidad, disponiendo en el numeral 3 como uno de ellos la provisionalidad *“Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal cuando el titular no este percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa. // Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección”*.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la resolución 0-0787 del 9 de abril de 2014, el Despacho del Fiscal General de la Nación, verificó que la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que de acuerdo con el Decreto Ley 018 de 2014, el empleo en el que se nombra a la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, pertenece a la planta global del área Administrativa y será ubicado en la Dirección Jurídica, por necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Nombrar en provisionalidad en el cargo de **PROFESIONAL EXPERTO** en la Dirección Jurídica a la doctora ****SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, con cédula de ciudadanía No. **30.881.383**.

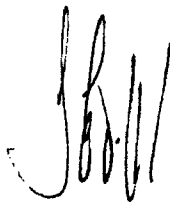
ARTÍCULO 2º. El nombramiento deberá ser comunicado a la interesada por el Departamento de Administración de Personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo, para que, dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la comunicación, manifieste su decisión, y deberá tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación.

ARTÍCULO 3º. La nombrada tomará posesión del cargo ante el **Subdirector de Talento Humano o el Jefe del Departamento de Administración de Personal**, acreditando que reúne los requisitos exigidos para tal efecto.



ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **18 MAR. 2016**



EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Angela Viviana Mendoza Barbosa		16 de marzo de 2016
Revisó:	Shelly Alexandra Duarte Rojas		16 de marzo de 2016
Aprobó:	Rocio del Pilar Forero Garzón		16 de marzo de 2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			



005542

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 5 de Abril de 2016, se presentó en el Departamento de Administración de Personal de la Subdirección Nacional de Talento Humano, la señora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 30.881.383**, con el fin de tomar posesión del cargo de **PROFESIONAL EXPERTO**, en la Dirección Jurídica, nombramiento efectuado mediante Resolución **No. 0-0863** del 18 de marzo de 2016.

Prestó el juramento de rigor conforme a los preceptos legales, por cuya gravedad se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes que el cargo le impone. Igualmente, se le enteró del artículo 60. de la Ley 190 de 1995.

Para esta posesión se presentó la siguiente documentación:

- Carta de Aceptación
- Certificado Antecedentes de Policía Nacional
- Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría
- Certificado de Deudores Morosos
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados
- Copia de la Tarjeta Profesional

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

NELBI YOLANDA ARENAS HERREÑO

Jefe Departamento Administración de Personal (E)

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Posesionada

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE LA COPIA
QUE REPOSA EN EL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DRL/ Leticia Beltrán R.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DIAGONAL 228 (AVDA. LOS CARLOS GALÁN) No. 52-01 BLOQUE C PISO 4 BOGOTÁ

CON MUTADOR 5702000 - 4149000 Exts. 2064

WWW.FISCALIA.GOV.CO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.480.196
CASTILLO CARDENAS

APellidos
ELIER ERNEY

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1958
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 0+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAR-1977 SANTANDER DE QUILICHAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL RAMIREZ TORRES

[Barcode]

A-1107800-00435-482 M-0010480196-20130511 0033012048A.2 7762157276

240329 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

140187 07/06/2005 15/04/2005
Tarjeta No. Fecha de Expedición Fecha de Grado

ELIER ERNEY
CASTILLO CARDENAS
10480196 CAUCA
Cedula Consejo Seccional

COOPERATIVA BOGOTA
Universidad

[Signature]
Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

[Portrait Photo]

[Signature]